PL 271 y OTROS

- PRODUCCIÓN...
- TRABAJO...



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

OFICIO Nº 246 -2022 –PR

Lima, 27 de julio de 2022

Señora
LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Presidenta del Congreso de la República
Presente. -

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Autógrafa de Ley para la formalización, desarrollo y competitividad de los micro y pequeños emprendimientos. Al respecto consideramos conveniente observar la misma por lo siguiente[1]:

De la Autógrafa de Ley

1. Conforme al artículo 1 de la Autógrafa de Ley para la formalización, desarrollo y competitividad de los micro y pequeños emprendimientos, la misma tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la formalización, el desarrollo y la competitividad de los micro y pequeños emprendimientos, como actores importantes en el crecimiento social y económico del país. Por su parte, el artículo 3 define el ámbito de aplicación de la Autógrafa de Ley, señalando que están comprendidos en la misma:

   a) Los microemprendimientos y los pequeños emprendimientos conforme a las disposiciones para cada caso.
   b) Las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad exclusiva y común, así como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, solo en cuanto al régimen laboral establecido para los microemprendimientos o microempresas respecto de los trabajadores que les prestan servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y cuando no excedan de diez (10) trabajadores.
   c) Los emprendedores dedicados a la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras infusiones y de quinua, maca y kiwicha, considerados en la Ley 30198, respecto a los beneficios establecidos para los microemprendimientos o microempresas.
   d) En la presente ley, con el uso del acrónimo Mype se hace referencia a los micro y pequeños emprendimientos o micro y pequeñas empresas; y con el término emprendedor se hace referencia a su titular o conductor.

   Además, el artículo 4 señala las exclusiones, indicando que no están comprendidos en la Autógrafa de Ley ni pueden acogerse a los beneficios que establece:

   a) Los emprendimientos que, no obstante cumplir con las características establecidas en el artículo 8, conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplen con dichas características, falseen información o dividan sus unidades empresariales, bajo sanción de

[1] Sobre la base del Informe N° D001041-2022-PCM-OGAJ, Informe Técnico N° D000015-2022-MIMP-DPDAEM, Informe N° 757-2022-OGAJ/MINSA, Informe N° 0073-2022-MINCETUR/SG/AJ – CRC, Informe N° 00790-2022-MINEDU/SG-OGAJ, Informe N° 0044-2022-EF/46.01 e Informe N° 0545-2022-MTPE/4/8.

inhabilitación temporal prevista en el literal b), artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF.

b) Las unidades económicas o empresas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines.

El artículo 5 señala los roles del Estado a través de los tres niveles de gobierno. Asimismo, el artículo 6 establece lineamientos básicos para la actuación del Estado. El artículo 7 define emprendimiento y emprendedor. Además, el artículo 8 señala las características y definición del emprendimiento, como aquel emprendimiento que cuenta con:

a) Ventas anuales hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se denomina microemprendimiento o microempresa.
b) Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT se denomina pequeño emprendimiento o pequeña empresa.

Asimismo, la Autógrafa regula la formalización del emprendimiento (capítulo II); los instrumentos para la promoción de los MYPE (capítulo III); la profesionalización, capacitación y asistencia técnica (capítulo IV); el acceso a los mercados y a información (capítulo V); la investigación, innovación y servicios tecnológicos (capítulo VI); el apoyo a la gestión y desarrollo empresarial (capítulo VII); el acceso al financiamiento (capítulo VIII); el régimen tributario de los micro y pequeños emprendimientos (capítulo IX); el régimen laboral de los micro y pequeños emprendimientos (capítulo X); el aseguramiento en salud (capítulo XI); sistema de pensiones sociales (capítulo XII); marco institucional para los micro y pequeños emprendimientos (capítulo XIII); los Consejos Regionales y Consejos Locales del micro y pequeño emprendimiento (capítulo XIV); y, la fiscalización a los micro y pequeños emprendimientos (capítulo XV).

Además, las disposiciones complementarias finales establecen la declaración de interés nacional de la elaboración de una política de formalización de los MYPEs, creación de registros, exoneración de costos, financiamiento, vigencia, entre otras. Asimismo, la única disposición complementaria transitoria declara en emergencia a los microemprendimientos por un plazo de tres (3) años contados desde la vigencia de la presente ley, estableciendo disposiciones que rigen en dicho plazo.

Por otro lado, la primera disposición complementaria modificatoria modifica los artículos 165 y 180 del Decreto Legislativo 816, que aprueba el Código Tributario, referidos a la determinación de la infracción, tipos de sanciones y agentes, así como, los tipos de sanciones. Asimismo, la segunda disposición complementaria modificatoria modifica el artículo 39 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, referido a la cuantía y aplicación de sanciones.

Finalmente, la única disposición complementaria derogatoria deroga diversos artículos de la Leyes N° 30056, 29566, 29034, 30230, 30327, 28976, 27268, 27444 y 28015 y del Decreto Legislativo 1086. También deja sin efecto los Decretos Supremos 005-2007-SA y 013-2013-PRODUCE.

Observación a la Autógrafa de Ley

2. Al respecto debemos señalar lo siguiente:

Afectación al principio constitucional de separación de poderes

El principio de separación de poderes rige la organización del Gobierno de nuestro país; reconocido en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú:

> *"**Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno***
> *Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.*
> *El Estado es uno e indivisible.*
> *Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y **se organiza según el principio de la separación de poderes**".* (Énfasis agregado)

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que llega a constituirse en una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho, garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos, así como un límite al poder[2]. Vinculado con dicho principio se encuentra el principio de competencia, recogido en el numeral VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE):

> *"**Artículo VI.- Principio de competencia***
> *1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son cumplidas por los otros niveles de gobierno.*
> *2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y atribuciones inherentes a ellas".*

El **numeral 11.2 del artículo 11 de la Autógrafa de Ley** señala que el Ministerio de la Producción, en coordinación con los sectores competentes, y en un plazo de ciento veinte (120) días calendario, implementa un plan integral de formalización MYPE. Asimismo, el numeral 13.1 del artículo 13 señala que el Estado elabora, con participación de los representantes de las organizaciones de emprendedores, el plan y programas estratégicos sobre MYPE y que establece los mecanismos necesarios para su implementación y ejecución. Además, el numeral 38.2 del artículo 38 señala que el Ministerio de Economía y Finanzas establece un plan de medidas, en los sistemas administrativos bajo su rectoría, que incentive el pronto pago a los proveedores de bienes y servicios. Adicionalmente, el literal a) del artículo 79 de la Autógrafa de Ley señala como una de las funciones del Consejo Nacional para el Desarrollo del Micro y Pequeño Emprendimiento (Codemype) la de aprobar el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de los Micro y Pequeños Emprendimientos que incorpora las prioridades regionales por sectores señalando los objetivos y metas correspondientes.

Al respecto, según el artículo 25 de la LOPE los ministros de Estado son los encargados de dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, aprobar planes de actuación, y asignar los recursos necesarios para su ejecución, por lo que no corresponde que mediante una norma con rango de Ley a iniciativa del Poder Legislativo se establezca la aprobación de determinados planes, además que por su rango normativo deja poco margen para el perfeccionamiento continuo de dichos instrumentos, ya sea por razones operativas, o de estrategia para su cabal cumplimiento.

Por otro lado, el **literal b) del numeral 23.2 del artículo 23 de la Autógrafa de Ley** señala que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en coordinación con PROMPERÚ, según sus atribuciones y competencias, incorpora a representantes de los micro o pequeños emprendimientos en las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX); además, señala que el reglamento de la ley establecerá el procedimiento y mecanismo de participación. Del mismo modo, el artículo 19 de la

---

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N.° 0023-2003-AI/TC. Fundamento Jurídico N° 5.

Autógrafa de Ley, establece la participación de los emprendedores en las OCEX. Al respecto, el numeral 7, del artículo 5 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del MINCETUR, señala que es su función fomentar el desarrollo de las exportaciones, del turismo y la artesanía en términos de eficiencia y competitividad, a través de las "oficinas comerciales del Perú en el exterior". Para tal efecto, determina la creación de sedes donde corresponda, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para las gestiones correspondientes ante el Estado receptor. Asimismo, el artículo 1 de la Ley N° 29890, establece que el MINCETUR es competente para dictar y administrar las políticas de las OCEX y para designar a los consejeros y agregados económicos comerciales. Además, el artículo 74-Q, del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del MINCETUR, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y modificatorias, precisa que las OCEX son "órganos desconcentrados" del MINCETUR que dependen del Despacho Ministerial.

En ese sentido, considerando que la Autógrafa de Ley establece la incorporación de representantes de las MYPE en las OCEX, se advierte que estas propuestas inciden en el funcionamiento de dichos órganos desconcentrados del MINCETUR, que forman parte de su estructura orgánica, correspondiendo únicamente al Ministro de dicho Sector proponer y determinar la organización de su Ministerio a cargo, ello conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la LOPE.

Por su parte, el **artículo 32 de la Autógrafa de Ley** establece nuevas funciones a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en la gestión de negocios de los emprendedores. Asimismo, el numeral 31.1, del artículo 31 de la Autógrafa de Ley establece que COFIDE, el Banco de la Nación y el Banco Agrario (AGROBANCO) promueven y articulan integralmente a través de los intermediarios financieros el financiamiento a los MYPE. Al respecto, el artículo 41, del Capítulo V "Empresas de Propiedad del Estado", del Título IV de la LOPE, prescribe que corresponde al Poder Ejecutivo determinar el ámbito de actuación de las Empresas del Estado; por tanto, se observa este extremo de la propuesta al asignar nuevas funciones y servicios a las empresas del Estado que forman parte del Gobierno Nacional.

También la Autógrafa de Ley, en su **Única Disposición Complementaria Derogatoria**, deroga, entre otras normas, el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). Si bien, actualmente el referido artículo no está estructurado en párrafos sino en numerales, podría interpretarse que la propuesta estaría derogando el numeral 48.2 del referido artículo, que está referido a las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como entidad rectora y máxima autoridad técnico normativa del Sistema de Modernización de la Gestión Pública y de simplificación administrativa. Dicha rectoría ha venido siendo fortalecida atendiendo a una mejor delimitación. Una primera muestra la constituye las estrategias de simplificación para la mejora del acervo regulatorio y de trámites, como es el caso del Análisis de Calidad Regulatoria de Procedimientos Administrativos (ACR). El segundo componente está referido al mantenimiento de lo ya depurado con el objetivo de asegurar la calidad del ambiente normativo. También se ha precisado que la PCM supervisa y vela por el cumplimiento de la LPAG, salvo lo relativo a la determinación de los derechos de tramitación. Asimismo, se ordenaron las funciones respecto a INDECOPI, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, fortaleciendo el rol de fiscalización que ostenta esta última entidad.

En ese sentido, mediante Decreto Legislativo Nº 1452 se precisó que la PCM mantiene competencia para la supervisión de la implementación de las normas de simplificación administrativa previstas en la LPAG, así como aquellas otras previstas en normas

especiales como el Decreto Legislativo Nº 1203, Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA), entre otras. En ese sentido, un Poder del Estado no puede determinar y/o condicionar la organización y funcionamiento de otro Poder del Estado, al gozar cada Poder de autonomía para determinar cómo llevará a cabo sus funciones sustantivas.

En tal sentido, en los extremos señalados la Autógrafa de Ley, al ser una iniciativa del Congreso de la República que incide en la organización y competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, vulnera el principio de separación de poderes, reconocido en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, y el principio de competencia recogido en el numeral VI del Título Preliminar de la LOPE, en la medida que este Poder del Estado goza de autonomía para determinar cómo llevará a cabo sus funciones sustantivas asignadas.

Afectación a la autonomía de los Gobiernos Regionales y Locales

Los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú establecen lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 191.-** Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. (...)".*
>
> *"**ARTÍCULO 194.-** Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.(...)".*

En concordancia con lo indicado, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el artículo 2 de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señalan que:

> *"**ARTÍCULO II.- AUTONOMÍA***
> *Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.*
> *La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".*
> *"**Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica***
> *Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal".*

Adicionalmente, en cuanto a la autonomía de gobierno y sus dimensiones, los artículos 8 y 9 de la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización, establecen lo siguiente:

> *"**Artículo 8.- Las autonomías de gobierno***
> *La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas.*
>
> ***Artículo 9.- Dimensiones de las autonomías***

9.1. *Autonomía política: es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes.*

9.2. *Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad.*

9.3. *Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias."*

(Énfasis agregado)

Es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y el artículo 42 de la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización, respectivamente, establecen lo siguiente:

*"**Artículo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización***

Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asignan la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno.

1. Competencias Exclusivas

Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes:

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

(...)"

"(...)

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS MUNICIPALES

Artículo 42.- Competencias exclusivas

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes.

b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos.

c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer necesidades colectivas de carácter local.

d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

(...)"

(Énfasis agregado)

El artículo 9 de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala lo siguiente:

*"**Artículo 9.- Competencias constitucionales***

Los gobiernos regionales son competentes para:

a) Aprobar su organización interna y su presupuesto.

b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.

c) Administrar sus bienes y rentas.

(...)"

(Énfasis agregado)

El **artículo 80 de la Autógrafa de Ley** establece que los gobiernos regionales y gobiernos locales crean, en forma obligatoria en su circunscripción y bajo responsabilidad, consejos regionales y consejos locales del micro y pequeño emprendimiento, con el objeto de promover su formalización, desarrollo y competitividad, así como su articulación con los planes y programas nacionales. Asimismo, el artículo 81 establece criterios respecto a su conformación y presidencia. Al respecto, de acuerdo a la base legal citada, constituye una competencia exclusiva de los gobiernos regionales y locales el aprobar su organización interna y su presupuesto institucional, además, las instancias de coordinación inter regiones o locales (comisiones multiregionales y multilocales) se crean a propuesta de dos o más gobiernos regionales o locales, según corresponda, mediante Acuerdo. En tal sentido, la Autógrafa de Ley también vulnera la autonomía de los gobiernos regionales y locales en el extremo señalado.

Afectación al principio de coherencia normativa

Debemos tener en consideración la definición del principio de coherencia normativa establecida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico N°48 de la Sentencia EXP. N°047-2004-AI/TC, que señala:

> *"48. De lo dicho se concluye que la normatividad sistémica descansa en la **coherencia normativa**. Dicha noción implica la existencia de la unidad sistémica del orden jurídico, lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas que lo conforman.*
>
> *Asimismo, presupone una característica permanente del ordenamiento que hace que este sea tal por constituir un todo pleno y unitario.*
>
> *Ella alude a la necesaria e imprescindible compenetración, compatibilidad y conexión axiológica, ideológica, lógica, etc., entre los deberes y derechos asignados; amén de las competencias y responsabilidades establecidas que derivan del plano genérico de las normas de un orden constitucional".*
> *(El subrayado es nuestro)*

Asimismo, el **literal a) del numeral 40.2 del artículo 40 de la Autógrafa de Ley**, señala que las empresas deben desarrollar las actividades económicas comprendidas en la Sección D de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas – Revisión 3.0, que se establezcan mediante Decreto Supremo; no obstante, conforme a lo que señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dicho organismo, en su calidad de ente rector del Sistema Estadístico Nacional y en cumplimiento de uno de los objetivos y atribuciones conferidos por el Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, aprobó la Resolución Jefatural Nº 256-2009-INEI, modificada con Resolución Jefatural N° 024-2010-INEI, estableciendo oficialmente en el país la utilización de la cuarta revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas CIIU Revisión 4, para asignar la actividad económica de las empresas y sus establecimientos; permitiendo establecer y consolidar un esquema conceptual uniforme para relevar información a nivel de empresas y establecimientos productivos de bienes y servicios, y con la finalidad de que las actividades productivas que realizan los agentes económicos en el territorio nacional, se encuentren debidamente identificadas y representadas, constituyendo uno de sus objetivos principales, la generación de estadísticas oficiales comparables y coherentes a nivel regional, nacional e internacional.

Al respecto, el **numeral 78.1 del artículo 78 de la Autógrafa de Ley** señala que el Codemype es presidido por un representante del Presidente de la República, preferentemente titular o conductor de un microemprendimiento; no obstante, con dicha preferencia se podría estar generando un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que el representante del Presidente de la República no debería representar intereses particulares o privados, en el marco de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y demás normas aplicables.

Además, la **Única Disposición Complementaria Transitoria de la Autógrafa de Ley** dispone la declaratoria de Emergencia de los Emprendimientos, por un plazo de tres años contados desde su vigencia, a partir de la cual en las compras estatales previstas en la Autógrafa, no será exigible a la MYPE historial o antecedentes contractuales con el Estado y se priorizará la oferta de los MYPE regionales y locales del lugar donde se realicen las compras o se ejecuten las obras públicas; sin embargo, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala en su artículo 11 los impedimentos para ser proveedor del Estado. En tal sentido, considerando que la referida disposición estaría destinada a eximir o no tener en cuenta las sanciones que se le hubieran impuesto a los MYPE o si está incursa en impedimentos, ello conllevaría a riesgos en el correcto desarrollo del proceso de contratación, al aumentar exponencialmente la posibilidad de contratar con proveedores no idóneos.

Por tanto, la Autógrafa de Ley, al no guardar concordancia entre sus disposiciones y al contravenir la normativa antes señalada, también estaría contraviniendo el principio de coherencia normativa, generando confusión.

Sobre el ámbito previsional de la Autógrafa de Ley

Del **numeral 61.1 del artículo 61** se desprende que se otorga libertad a los trabajadores de las microempresas para que se puedan afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales existentes (Sistema Nacional de Pensiones Y Sistema Privado de Pensiones); asimismo, el **numeral 61.2 del artículo 62** menciona que aquellos que no decidan afiliarse a alguno de ellos, podrá hacerlo al Sistema de Pensiones Sociales. Estas disposiciones son contradictorias con el **numeral 62.1 del artículo 62**, que establece que el Sistema de Pensiones Sociales es obligatorio para los trabajadores y conductores de la microempresas, que no superen los 40 años. En ese sentido, no es posible que trabajador pueda elegir el régimen previsional (Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones) y a la vez deba afiliarse obligatoriamente al Sistema de Pensiones Sociales.

Por otra parte, la Autógrafa de Ley propone que el afiliado adquiere el derecho a pensión al cumplir 65 años de edad, sin ningún requisito adicional. Teniendo en cuenta que los aportes también provienen del Estado, es necesario que estos recursos se orienten a cubrir pensiones, y esto solo es posible si los aportes se realizan durante un periodo de tiempo, que permita acumular un fondo de pensiones para dicho fin. Es posible que algunos trabajadores únicamente aporten algunos meses o muy pocos años, por ejemplo, el 80% de trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que han dejado de aportar hasta antes del inicio de la pandemia, tienen menos de dos años de aportes. Los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones Sociales que acumulen un fondo exiguo, posiblemente soliciten la devolución de sus aportes, como ocurre

actualmente en el Sistema Privado de Pensiones[3], carece de sentido que se otorgue recursos del Estado para cubrir retiros ante la imposibilidad de lograr un fondo que financie pensiones.

Sobre la propuesta de traslado del Sistema de Pensiones Sociales al Sistema Nacional de Pensiones y viceversa, cabe señalar que la lógica del sistema de reparto en que se basa el Sistema Nacional de Pensiones, tiene como característica principal la solidaridad intergeneracional para el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas, que son financiadas con la recaudación de aportes de los afiliados activos. Es decir, el sistema de reparto se organiza sobre la base de un aporte obligatorio, realizado por trabajadores en actividad, los recursos provenientes de aportes recaudados sirven para atender las pensiones de trabajadores retirados.

Esta solidaridad previsional es de carácter intergeneracional, y posee una doble dimensión:

- Una obligación, dado que los trabajadores durante su etapa laboral activa, sustentan las prestaciones de quienes, por razones justificadas a su condición, son actuales pensionistas, pues sus aportaciones permiten cumplir con el pago de las obligaciones pensionarias, sin omitir el rol subsidiario del Estado.
- Un derecho en curso de adquisición, debido a que se obtiene la expectativa de percibir un beneficio cuando el estado de necesidad alcance al aportante o a los miembros de su familia[4].

En esa perspectiva, el Sistema Nacional de Pensiones está diseñado para que parte del financiamiento del pago a todos los pensionistas actuales (planilla de pensiones) se dé a través del pago de las aportaciones de los trabajadores en actividad (recaudación mensual), es decir, los aportes de las generaciones jóvenes, que están en capacidad de generar ingresos, financian de manera colectiva las pensiones de los trabajadores de mayor edad, que se han jubilado, de esta forma se articula la ayuda mutua entre generaciones, y se define el carácter solidario del sistema.

Los aportes al Sistema Nacional de Pensiones no se acreditan en cuentas individuales, la totalidad de lo que se recauda por este concepto, se destina al pago actual de la planilla de pensiones, y se agota cada vez que se pagan las pensiones; es decir, no se acumulan en un fondo colectivo y mucho menos individual al cual recurrir para efectuar los traslados al sistema financiero, según se propone en el proyecto de ley.

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 151/2021, recaída en el Expediente N° 00016-2020-PI/TC, precisa como una de las características del Sistema Nacional de Pensiones que los **aportes que se recaudan no se acumulan en un fondo colectivo permanente ni mucho menos en uno individual a partir del cual sea posible identificar el monto entregado por cada trabajador**.

Es importante mencionar que la identificación de los aportes declarados por los empleadores y los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones no constituye ni configura la existencia de cuentas individuales. Es decir, no existe un fondo particularizado; la lógica del fondo común es la existente en el marco de la normativa vigente. La identificación de los aportes por persona sirve para un mayor orden de

---

[3] Mediante Ley N° 30425 se autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones con 65 años de edad, el retiro de hasta el 95.5% del fondo disponible en su cuenta individual de capitalización

[4] Entre muchas, Resolución del Tribunal Administrativo Previsional N° 2916-2018-ONP/TAP recaída en el Expediente 11101154107 del Decreto Ley N° 19990.

recaudación y ayuda a facilitar el cálculo de la pensión cuando la persona cumple los requisitos para su jubilación. Este ordenamiento no implica que la administradora del sistema (ONP) maneja una cuenta separada tipo CIC de las AFP. Sobre el particular, se detalla que esto es un error conceptual que ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional:

> *"(...) la implementación de cuentas individuales de los asegurados en el Sistema Nacional de Pensiones tiene una finalidad informativa consistente en el registro de las aportaciones efectuadas por cada asegurado para facilitar el otorgamiento de una pensión de jubilación, la misma que se seguirá financiando con el fondo común al que contribuyen todos los asegurados, manteniéndose de esta manera, inalterable la característica propia de los sistemas de reparto basados en la solidaridad"*[5].

En ese sentido, la propuesta para que el afiliado se pueda trasladar del Sistema de Pensiones Sociales al Sistema Nacional de Pensiones y viceversa, no se podría aplicar, dado que no es posible trasladar aportes del Sistema Nacional de Pensiones a otro régimen previsional, toda vez que ingresan al fondo común que es empleado para el pago de pensiones.

La aplicación de este tipo de medidas en el Sistema Nacional de Pensiones significa la devolución de aportes realizados a este régimen previsional, medida que deviene en inconstitucional, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).

Sobre la naturaleza del Sistema Nacional de Pensiones, creado por el Decreto Ley Nº 19990, es de señalar que el TC[6], en el "Caso de la devolución de aportes al Sistema Nacional de Pensiones", explica la naturaleza jurídica del Sistema Nacional de Pensiones y sus características, según detalle:

> ***Naturaleza jurídica del Sistema Nacional de Pensiones e intangibilidad de los fondos de pensiones***
>
> *7. El Sistema Nacional de Pensiones fue creado en 1973 a través del Decreto Ley 19990 y pasó a ser administrado por la ONP en 1994, cuando se creó el Sistema Privado de Pensiones (en adelante, Sistema Privado de Pensiones), a cargo de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. El trabajador puede elegir afiliarse a uno u otro sistema; a nadie se le obliga a estar en uno u otro. Lo único obligatorio, sí, es pertenecer a uno de estos dos sistemas previsionales. La coexistencia del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones se sustenta en el artículo 11 de la Constitución, que establece que el Estado "garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas". Ahora bien, en el Sistema Privado de Pensiones, existen cuentas de capitalización individual de los aportes de sus afiliados, haciendo que la pensión dependa de lo aportado. Cuanto más aporte el trabajador, más obtendrá luego de pensión. En el Sistema Nacional de Pensiones, en cambio, no existen tales cuentas. Por tanto,* ***los montos de las pensiones no están relacionadas con lo aportado. El Sistema Nacional de Pensiones es uno de reparto, es decir, un fondo común al que ingresan los aportes de todos los afiliados****. Con estos aportes, se pagan hoy las pensiones de sus jubilados. Mañana, los aportantes actuales, ya jubilados, se beneficiarán del aporte que hagan los nuevos aportantes en ese momento. Así, el Sistema Nacional de Pensiones tiene las siguientes características:*
>
> *a) Otorga una prestación económica mensual a quienes han cumplido con los requisitos exigidos legalmente, pudiendo ser por derecho propio (pensión por jubilación, cesantía o invalidez) o derivado (pensión por viudez, orfandad o ascendientes).*
>
> *b)* ***Se fundamenta en el principio de solidaridad intergeneracional. Los aportes realizados mensualmente por sus afiliados financian las pensiones de quienes ya se jubilaron. La totalidad de los aportes mensuales se destinan al pago de las pensiones que se deben abonar en la actualidad****.*
>
> *c)* ***Las personas que aportan más al sistema favorecen las pensiones de quienes aportaron menos en su momento.***

---

[5] Fundamento 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0007-2008-PI/TC

[6] Fundamento 7 de la STC N° 151/2021, recaída en el Expediente N° 00016-2020-PI/TC

d) Los aportes aludidos no se acumulan en una cuenta de capitalización individual para el pago futuro a quienes los realizan, sino que se utilizan para financiar el pago de las pensiones actuales. Sin embargo, generan el derecho a recibir pensiones que, a su vez, serán financiadas por quienes sean los aportantes en el momento en que se jubilen.

e) Los aportes que se recaudan no se acumulan en un fondo colectivo permanente ni mucho menos en uno individual a partir del cual sea posible identificar el monto entregado por cada trabajador. Es un sistema de reparto que se utiliza para asumir los gastos y cargas económicas de las generaciones previas. Y esto es independiente de la existencia de un registro de los montos aportados a lo largo del tiempo. Y,

f) El ahorro previsional que se realiza en el Sistema Nacional de Pensiones es colectivo. Las personas ahorran realizando aportes al Sistema Nacional de Pensiones, para poder luego disfrutar de una pensión durante su vejez.

En cuanto a la protección del ahorro previsional, la jurisprudencia del TC establece que es parte del derecho a la pensión el acceso a los sistemas para poder aportar[7]. El ahorro que se realiza en el Sistema Nacional de Pensiones es colectivo[8], y no debe identificarse con la acumulación de dinero en una cuenta, sino con el aporte a un servicio público que permite obtener un derecho que servirá cuando se deje de trabajar al haber adquirido cierta edad. La persona debe ahorrar realizando una cantidad de aportes (sin importar el monto) que le permita obtener derecho una pensión durante su vejez.

La protección del ahorro previsional (fondos previsionales) está constitucionalmente definida: *"Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley"*[9]. Una norma como ésta *"(...) tiene por propósito asegurar que los fondos y las reservas de la seguridad social no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la garantía del pago de una pensión (...)"*[10] y se configura como la garantía institucional del derecho fundamental a la pensión[11].

Cabe agregar que el Sistema Nacional de Pensiones es un régimen previsional financieramente deficitario, y entre los motivos que explican esta situación, encontramos que no se ajustaron oportunamente sus variables previsionales, tales como tasa de reemplazo, tasa de aporte, edad de jubilación, densidad de aporte mínimo, los cambios demográficos y laborales. Por tanto, el Sistema Nacional de Pensiones no cuenta con recursos para transferir aportes, ante la eventualidad de que el trabajador de la micro y pequeña empresa, afiliado a este régimen previsional, decida incorporarse al Sistema de Pensiones Sociales.

La Autógrafa de Ley promueve la salida de trabajadores de la micro y pequeña empresa que actualmente se encuentra aportando al Sistema Nacional de Pensiones, al direccionar sus aportes a otro régimen de pensiones, esta medida debilita la principal fuente de recursos (aportes) que cuenta el Sistema Nacional de Pensiones para pagar las pensiones. Teniendo en cuenta que la pensión que se paga actualmente requiere de la ayuda del colectivo de afiliados aportantes, la reducción de aportantes implica que el Sistema Nacional de Pensiones tenga menos recursos para cubrir la planilla actual de las pensiones, y requerirá de mayores transferencias del Tesoro Público para asumir el agravamiento del déficit generado a consecuencia de la aplicación de la presente Autógrafa de Ley.

---

7 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1417-2005-AA/TC
8 Fundamento 43 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0013-2012-PI/TC
9 Artículo 12 de la Constitución Política del Perú
10 Fundamento 31 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0014-2007-PI/TC
11 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0050-2004-AI/TC y otros

En esa línea, debe precisarse que no se advierte un estudio que demuestre la viabilidad técnica y financiera en términos de costo beneficio, que analice como se afecta al Sistema Nacional de Pensiones y su impacto financiero actual y futuro, máxime cuando aproximadamente el 65% de los actuales aportantes al Sistema Nacional de Pensiones se desempeña en el segmento MYPE, y se genera incentivos para que este grupo de trabajadores, y aquellos que recién se incorporen al mercado laboral, opten por pertenecer al Sistema de Pensiones Sociales, afectándose de esta manera la fuente de recursos del Sistema Nacional de Pensiones para pagar las actuales pensiones, y esto redunda en un mayor déficit para este régimen previsional, que al no contar con recursos suficientes, requerirá de mayores transferencias de recursos del Tesoro Público, generando así un incremento del gasto público por aplicación directa de la Autógrafa de Ley. Por tanto, la Autógrafa de Ley va contra lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución.

Por otro lado, el **artículo 65 de la Autógrafa de Ley** dispone que los afiliados al Sistema de Pensiones Sociales podrán acceder a una pensión por situación de discapacidad permanente total o parcial. De la misma manera, de acuerdo al numeral b) del inciso 71.2 del artículo 71 de la Autógrafa de Ley, subsiste el derecho de pensión de orfandad para los hijos inválidos mayores de 18 años en situación de **discapacidad permanente total**.

Cabe señalar que, de acuerdo a la definición que se realiza en el artículo 2 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

Asimismo, de acuerdo al artículo 45 de la mencionada ley, las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, pudiendo de esta manera, también afiliarse a un sistema previsional.

De la misma manera, la Autógrafa de Ley dispone además que esta discapacidad permanente total o parcial será declarada de acuerdo a las normas que rigen el Sistema Privado de Pensiones o Sistema Nacional de Pensiones.

Al respecto, de acuerdo a las normas del Sistema Privado de Pensiones, este otorga protección ante los riesgos de invalidez, y de acuerdo al artículo 115 del reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-98-EF, para acceder a una pensión de invalidez son aplicables las siguientes condiciones:

a) Invalidez Parcial: el trabajador afiliado que se encuentre ***en incapacidad física o mental*** de naturaleza prolongada, de acuerdo a lo que establezca el comité médico competente, por la cual quede impedido en un cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad de trabajo, siempre y cuando ésta no alcance las dos terceras partes (2/3) de la misma.
b) Invalidez Total: el trabajador afiliado que se encuentre en ***incapacidad física o mental*** que se presume de naturaleza permanente, de acuerdo a lo que establezca el comité médico competente, por la cual quede impedido para el trabajo cuando menos en dos 2/3 de su capacidad de trabajo.

De igual forma, el artículo 2 del Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones aprobado mediante Resolución N° 232-98/EF/SAFP, define lo referente a invalidez de la manera siguiente:

> *"(...)*
>
> *d)* ***Invalidez****: condición médico-administrativa-laboral que alude a la* ***pérdida del 50% o más de la capacidad de trabajo del afiliado****, que le imposibilita realizar un trabajo compatible con sus capacidades. Tal pérdida o menoscabo tiene un grado parcial o total y una naturaleza temporal o permanente (...).*
>
> *e)* ***Inválido parcial****: aquel afiliado que sufra un* ***menoscabo en su capacidad*** *de trabajo en un porcentaje igual o superior al 50% pero inferior a los dos tercios, conforme al dictamen emitido por el COMAFP o COMEC, según sea el caso.*
>
> *f)* ***Inválido total****: afiliado que sufra un menoscabo* ***en su capacidad de trabajo*** *igual o superior a dos tercios, conforme al dictamen emitido por el COMAFP o COMEC según sea el caso.*
>
> *(El resaltado y subrayado es nuestro)*
>
> *(...)"*

De lo anteriormente expuesto, se colige que para acceder a una pensión de invalidez en el Sistema Privado de Pensiones lo que se determina es la afectación de la capacidad de trabajo del afiliado, por lo que el objetivo de la pensión de invalidez es reemplazar el ingreso percibido (remuneraciones), es decir, la pensión de invalidez devendría en una prestación económica anticipada a la vejez ocasionada por la incapacidad. De la misma manera, para la subsistencia del derecho a pensión de orfandad, la calificación se realiza a la afectación de capacidad de trabajo del derechohabiente, otorgando una pensión que pueda cubrir sus necesidades existenciales.

Por lo tanto, lo regulado en los **artículos 65 y 71 de la Autógrafa de Ley**, sobre la pensión de discapacidad y subsistencia de orfandad, no toma en cuenta que la pensión de invalidez y de subsistencia de orfandad, debe delimitarse a la disminución de la capacidad de trabajo del afiliado y del derechohabiente y no estar determinada a la condición de discapacidad de una persona, ya que como la misma Ley General de la Persona con Discapacidad señala, una discapacidad no es una limitante para poder realizar una actividad laboral.

De esta manera, la Autógrafa de la Ley estaría desnaturalizando el objeto de la pensión de invalidez al reemplazarlo por una pensión por discapacidad. Asimismo, resultaría inaplicable la normativa vigente del Sistema Privado de Pensiones para determinar la discapacidad del afiliado o derechohabiente ya que como lo hemos mencionado el Sistema Privado de Pensiones otorga prestaciones de invalidez por incapacidad parcial o total a sus afiliados.

Adicional a lo señalado, debe precisarse que en el **artículo 68 de la Autógrafa de Ley**, referido al reintegro de aportes, se ha determinado que el afiliado que sea declarado con "incapacidad permanente parcial", puede solicitar el reintegro del monto acumulado en su cuenta individual. De esta manera, se está incluyendo como criterio a tomar en cuenta la incapacidad del afiliado, incongruencia con lo regulado en el artículo 65 de la Autógrafa de Ley.

Sobre el ámbito de la gestión de adquisiciones de la Autógrafa de Ley

La **Segunda Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley** establece, entre otros aspectos, que se declara de interés nacional la asignación de bienes inmuebles de propiedad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, para el desarrollo de zonas industriales o parques industriales con la finalidad de fomentar la creación, formalización, desarrollo y competitividad, preferentemente, de los microemprendimientos iniciados por los jóvenes del país.

Al respecto, se debe indicar que, del contenido de dicha disposición, este tiene como objetivo la **habilitación de zonas o parques industriales**, lo cual apunta a la necesidad de entregar a favor de los micro y pequeños emprendedores "**terrenos**" donde se puedan instalar la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades relacionadas a sus emprendimientos.

En este punto, cabe precisar que, el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF, define a los "Bienes Inmuebles" como aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo.

Asimismo, a través de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1439 se modificó la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. En atención a ello, se restringe el ámbito de competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) respecto de los bienes estatales, disponiendo que estos se circunscriben a los predios, tales como terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.

En ese sentido, la propiedad del Estado se encuentra bajo el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA) cuando se trate de "bienes inmuebles" (edificaciones, incluyendo el terreno sobre el cual se encuentran), y bajo el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales cuando se trate de "predios" (terrenos).

Considerando el marco normativo expuesto, se debe señalar que la Segunda Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley no se circunscribe dentro del ámbito de la competencia respecto a su componente de Administración de Bienes, en lo referido a los **bienes inmuebles**.

En dicho contexto, teniendo en cuenta lo señalado, corresponde que la referencia a "***bienes inmuebles de propiedad del Estado***" contenida en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley, debe ser suprimida a efectos de evitar confusiones que puedan involucrar a los "*bienes inmuebles*" que se encuentran dentro del SNA, en tanto lo que debería corresponder es que se haga referencia a "predios (terrenos)".

Sobre el ámbito tributario de la Autógrafa de Ley

La definición de MYPE que considera la Autógrafa en el artículo 8 es similar a la del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento

Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, donde se categoriza a las microempresas como aquellas con ventas hasta 150 UIT y pequeñas empresas con ventas superiores a 150 UIT y hasta 1700 UIT. Esta es una definición que no responde a fines tributarios y que incluye al más del 99% de las empresas del país.

Según evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), los tamaños de MYPE en el Perú están sobredimensionados, lo cual impide una adecuada focalización de las medidas tributarias al referido segmento de empresas. De acuerdo con el FMI, para fines tributarios, es importante definir los umbrales para las micro y pequeñas empresas los que deben ser consistentes con la capacidad de cumplimiento del contribuyente. Aunado a ello, se debe generar un acceso fácil a la formalidad considerando que el Perú tiene un alto porcentaje de informalidad por encima del resto de América del Sur.

En este sentido, los beneficios tributarios que crea la Autógrafa no estarían focalizándose solo en un grupo de empresas vulnerables, sino que en la práctica se aplicarían a casi todas las empresas del país.

Sobre el particular, en materia de tasas del Poder Ejecutivo la Autógrafa dispone lo siguiente:

a) De acuerdo al numeral 10.4 del artículo 10, la constitución e inscripción registral del microemprendimiento que cumpla determinados requisitos goza de la exoneración del pago de tasas registrales prevista en la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE.

b) De acuerdo al primer párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria Final las MYPE están exoneradas del 70% de los derechos de pago previstos en el TUPA del MTPE, por los trámites y procedimientos que efectúen ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

c) De acuerdo al literal a) de la Única Disposición Complementaria Transitoria el proceso de formalización que comprende la inscripción registral y demás trámites ante entidades del Poder Ejecutivo para el funcionamiento de los microemprendimientos señalados en la referida Autógrafa son gratuitos.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 74 de la Constitución Política del Perú dispone que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

De lo anterior se tiene que la Constitución Política del Perú asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo en materia de tributos del tipo tasa a su cargo[12] siendo que el Congreso de la Republica no está facultado para crear, modificar, derogar ni exonerar de dichos tributos.

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior se debe indicar que, conforme al Código Tributario, la tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, cuyo

[12] De ahí que el Decreto Legislativo N° 1332, a que hace referencia el artículo 10 de la propuesta, solo dispuso la posibilidad de conceder una exoneración mediante Decreto Supremo.

cobro debe estar destinado únicamente a cubrir el costo de los servicios que constituyen los supuestos de la obligación.

En ese sentido, la determinación del monto de la tasa está sujeto a un límite cuantitativo –el cual es que el monto de la misma no exceda el costo del servicio público que constituye el supuesto de la obligación tributaria.

Ahora bien, el Código Tributario dispone que por Decreto Supremo refrendado por el ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas, se fija la cuantía de las tasas. Ello en atención a lo señalado por el artículo 74 de la Constitución Política del Perú que dispone que las tasas se regulan mediante decreto supremo.

Asimismo, el numeral 53.2 del artículo 53 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1452, señala que son condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación hayan sido determinados conforme a la metodología vigente, y que estén consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. Para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además, con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas.

En base a ello corresponde únicamente a las entidades del Poder Ejecutivo, tales como el MTPE o la SUNARP, entre otros, establecer la determinación de las tasas; quienes podrán realizar la evaluación correspondiente en relación a exonerarlas, mediante decreto supremo del sector, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario y en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior es necesario precisar que el Decreto Legislativo 1332, a que hace referencia el numeral 10.4 del artículo 10 de la Autógrafa, no exonera de tasas, sino establece la posibilidad que mediante Decreto Supremo se exoneren de estos tributos, norma que finalmente fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas.

De lo anterior se tiene que la regulación legal en materia de tributos del tipo tasa es coherente con el marco constitucional, siendo que no resulta procedente que mediante Ley se apruebe la exoneración de las tasas de las entidades del Poder Ejecutivo, toda vez que por mandato constitucional y legal esta debe hacerse mediante decreto supremo con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas y del ministro del Sector Competente, de corresponder, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario para la dación de exoneraciones tributarias, norma que tampoco se ha observado en las propuestas de exoneración de tasas a que se refiere la Autógrafa.

Entonces, la gratuidad de trámites ante el Poder Ejecutivo dispuesta en el **literal a) de la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Autógrafa** vulnera la Constitución al limitar la potestad tributaria originaria que tiene asignada el Poder Ejecutivo en materia de tributos del tipo tasas toda vez que, como se expuso, el artículo 74 de la Constitución asigna tal potestad al Poder Ejecutivo para que sea regulada mediante Decreto Supremo.

Por las consideraciones expuestas se observan las exoneraciones dispuestas en el **numeral 10.4 del artículo 10 y en el primer párrafo de la Cuarta Disposición**

Complementaria Final de la Autógrafa. Asimismo, se observa la gratuidad dispuesta en el **literal a) de la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Autógrafa**.

Respecto al régimen tributario de los micro y pequeños emprendimientos, si bien el artículo 39 de la Autógrafa tiene carácter declarativo, el **inciso d) de la Única Disposición Complementaria Transitoria** establece que "*El Poder Ejecutivo en el marco de sus atribuciones y competencias, debe establecer un régimen especial con impuesto único o monotributo y una declaración anual simplificada automatizada; además de exonerarle a los micro emprendimientos de llevar contabilidad o libros contables debiendo la SUNAT implementar un sistema que viabilice dicha exoneración y facilite la declaración anual simplificada de tributos*". Según el Dictamen de la Autógrafa de esta propuesta surge como consecuencia de la declaratoria de emergencia de los microemprendimientos, por el plazo de 3 años, debido a la ausencia de formalización de estas.

Al respecto, la Autógrafa no toma en consideración que según el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, los tributos se crean, modifican o derogan por ley, o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Y que no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.

En virtud del principio de reserva de ley contemplado en el artículo 74 citado, corresponde al Poder Legislativo la creación de tributos; por lo que, la Autógrafa deviene en inconstitucional. Si, el Poder Legislativo pretendiera delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, debiera en todo caso emitir una ley autoritativa y, además, conforme al artículo 104 de la Constitución Política del Perú, precisar la materia específica a regularse y el plazo para legislar. Lo cual no se observa en la Autógrafa.

Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo mediante el Proyecto de Ley N° 583-/2021-PE remitido al Congreso de la República con fecha 27 de octubre de 2021, solicitó facultades delegadas, para legislar y crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos; lo que incluye modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT). Sin embargo, el Congreso no concedió la facultad de legislar en dicha materia al Poder Ejecutivo.

Respecto a las infracciones comprendidas en la **Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Autógrafa, al plantear la modificación del artículo 180 del Código Tributario**, señala que las medidas educativas proceden ante la primera infracción detectada por la SUNAT o incurrida no detectada y comunicada por el infractor, y por cada tipo de infracción formal o sustancial de las previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 172 y precisadas en los artículos 173, 174, 175 y 176. Con lo cual –en principio- no comprendería aquellas infracciones previstas en los artículos 177 y 178 del código tributario.

Ahora bien, asumiendo que cuando se propone que las medidas educativas procedan una sola vez por cada tipo de infracción tributaria, se entiende a las tipificadas en los artículos 173 , 174 , 175 y 176 del Código Tributario, cabe destacar que la Autógrafa no considera, por ejemplo, que infracciones como las contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 175 y numeral 4 del artículo 176 denotan una conducta especialmente grave o de resistencia a las labores de control de la administración tributaria respecto de las

cuales, no se justifica un tratamiento como el propuesto. Así, se permitiría que el omitir registrar ingresos, rentas o patrimonios; la utilización de comprobantes falsos o adulterados para respaldar las anotaciones en libros o registros; o presentar declaraciones en forma incompleta o no conforme con la realidad.

Entonces, la Autógrafa no debería incluir "sanciones positivas" o "medidas educativas" que involucran infracciones graves sólo porque el infractor sea una MYPE[13], como es el caso de conductas fraudulentas, de resistencia a las labores de control de la administración tributaria o perjuicios a terceros como retenciones efectuadas no pagadas. Tampoco debería aplicarse cuando el contribuyente no ha subsanado el comportamiento que da lugar a la infracción.

Por otro lado, la propuesta no garantiza una mejora en el cumplimiento tributario. Cabe recordar que el sistema tributario se aplica sobre una economía con altos niveles de informalidad, y con ella la existencia de incumplimiento tributario generalizado[14]. En ese sentido el diseño de las infracciones y sanciones son parte de un conjunto de herramientas de control que buscan:

- Desincentivar la evasión y elusión tributaria.
- Cautelar el cumplimiento tributario.
- Reducir la competencia desleal entre contribuyentes proveniente de la evasión tributaria.

La propuesta podría promover el incumplimiento de obligaciones tributarias, pues las medidas educativas al no ser disuasivas ni condicionar al infractor a subsanar las omisiones tributarias detectadas o incurridas, restarán efectividad a los procedimientos de control, así como al procedimiento sancionador.

En ese sentido, se perfora los sistemas de control de la SUNAT, al no poder sancionar, no habrá coacción a los contribuyentes MYPE para que cumplan con sus obligaciones tributarias, que son básicamente: i) inscribirse en el padrón RUC, ii) emitir comprobantes de pago, iii) llevar sus libros contables, de ser el caso, iv) presentar sus declaraciones de impuestos según cronograma correspondiente, y v) pagar el impuesto determinado en sus declaraciones de impuestos.

De otro lado, cabe resaltar que actualmente a fin de promover el cumplimiento tributario la SUNAT realiza actividades de difusión sobre el alcance de las normas tributarias, entre otras, a través del dictado de charlas a nivel nacional dirigidas a todos los contribuyentes, ello en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 84 del Código Tributario que establece como obligación de la Administración Tributaria, la orientación al contribuyente, así como proporcionar información verbal, educación y asistencia al contribuyente, para lo cual podrá desarrollar, incluso medidas administrativas para orientar al contribuyente sobre conductas elusivas perseguibles.

Por otro lado, el **literal b) de la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Autógrafa** dispone la concesión de una amnistía para los microemprendimientos o micro empresas a fin de regularizar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de

---

[13] Por ejemplo: no registrar ingresos, rentas o patrimonios; la utilización de comprobantes falsos o adulterados para respaldar las anotaciones en libros o registros; ocultar o destruir bienes, libros o registros contables; impedir que funcionarios de la administración tributaria realicen inspecciones, entre otros.

[14] En relación al cumplimiento tributario de las MYPE, cabe indicar que es el segmento de contribuyentes donde mayor incumplimiento tributario existe, la generalización de este comportamiento se traduce en una menor recaudación y se evidencia en un nivel de incumplimiento en el año 2019 de 34,4% en el IGV y de 49,5% en el impuesto a la renta.

seguridad social vencidas hasta la entrada en vigencia de la Ley. La amnistía de seguridad social, referida a las aportaciones al ESSALUD y a la ONP, concede a los empleadores el beneficio de no pagar multas, intereses u otras sanciones administrativas que se generen o hubiesen generado por el incumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades administrativas tales como el ESSALUD y la ONP.

En relación a la amnistía de seguridad social referida a las aportaciones tributarias al ESSALUD y a la ONP, prevista en el literal b) de la Única Disposición Complementaria Transitoria, lo que se estaría proponiendo es una condonación parcial de la deuda tributaria por estos conceptos pues no se incluye el tributo insoluto, solo los intereses y las multas u otras sanciones.

Al respecto debe tenerse en cuenta que la condonación en materia tributaria está pensada en situaciones en las que un conjunto de personas, por un hecho externo a ellas, no pueden pagar un determinado concepto tributario, habiéndose perdido capacidad económica. Dicha condición no ha sido sustentada en la Autógrafa en comentario.

En este punto es preciso señalar que otorgar una amnistía sobre el pago de intereses y multas que componen la deuda tributaria, sin sustentar el fundamento para ello, resultaría finalmente ser un premio para el deudor tributario incumplido o moroso, desincentivando el cumplimiento de aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias en materia de seguridad social.

Finalmente, se estima que el costo fiscal potencial de la Autógrafa de Ley sólo respecto al crédito tributario por gastos de capacitación y la reducción de sanciones y multas sería de S/ 950 millones. Esta estimación no incorpora la reducción en la recaudación por el incremento del incumplimiento tributario del impuesto renta y del IGV, el cual fue, en el 2021, de 33,1 % y 28,0%, respectivamente. El incremento de un solo punto porcentual del incumplimiento de estos impuestos tendría efectos sobre la recaudación de S/ 1 670 millones en el 2023.

Sobre la capacitación y profesionalización de los emprendedores

El **numeral 14.1 del artículo 14 de la Autógrafa de la Ley**, señala que los institutos técnicos, tecnológicos e instituciones de educación superior públicos pueden establecer carreras para la formalización técnica y posterior profesionalización de los emprendedores. De igual manera, el **numeral 14.3**, señala que las universidades públicas, los institutos técnicos y tecnológicos superiores e instituciones de educación superior públicas establecen diplomados, programas de formación no profesional, programas de extensión entre otros, para la profesionalización del emprendedor.

Al respecto, se sugiere una redacción alineada a las denominaciones establecidas en la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de su Docentes, referido a los Institutos de Educación Superior (IES) y las Escuelas de Educación Superior (EES), así como, los Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST), en tanto el proceso de licenciamiento siga vigente, así mismo, la denominación de carreras debe emplearse el término de "programas de formación", de igual forma, se sugiere que en la Autógrafa de la Ley, se agregue la definición de "formación técnica" y finalmente se advierte que en la redacción sobre "profesionalización de emprendedores" hace precisión sobre la persona emprendedora y no el emprendimiento que es parte del objeto de la Autógrafa de la Ley, siendo que no es lo mismo hablar del emprendimiento y del emprendedor.

Sobre el Aseguramiento Universal de la Autógrafa de Ley

Respecto del **numeral 59.1 del artículo 59 y de los numerales 60.1 y 60.2 del artículo 60, así como del primer párrafo del literal b) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Autógrafa de Ley**, que incorpora a los trabajadores de los microemprendimientos al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud (SIS), es pertinente señalar que a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1163, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del SIS, se establece que cualquier iniciativa referida a la inclusión de nuevos grupos poblacionales que impliquen disposiciones o modificaciones en términos de coberturas relacionadas al uso de los fondos administrados por el SIS deberán contar obligatoriamente con la opinión favorable del Ministerio de Salud, en base a una evaluación económica o de impacto presupuestario realizada por el SIS, lo cual no se ha dado en este caso.

Sobre la situación de las mujeres que lideran micro y pequeños emprendimientos

De acuerdo con el documento "Perfil de la mujer emprendedora en el Perú 2020" elaborado por el Ministerio de Producción la Encuesta Nacional de Empresas reportó que en el año 2020 se registraron 209 mil 597 conductores de empresas formales, de los cuales el 26.8% eran mujeres, es decir, tres de cada diez conductores de empresas formales eran mujeres. A su vez señala que la mayor concentración de emprendimientos femeninos se da en la micro y pequeña empresa.

De otro lado, el referido documento en relación con empleabilidad de mujeres señala que el 44.8% del empleo por cuenta propia (personas que trabajan solas) es generado por mujeres. Asimismo, el 52.9% de las mujeres trabajan en microempresas porcentaje que sube al 59.6% cuando se agrega las cifras de la pequeña empresa; y es que, a decir del Ministerio de la Producción, en el mercado de trabajo peruano son las micro y pequeña empresa (MYPE) las que emplean a mayor cantidad de personas. La medianas y grandes empresas aportan en conjunto un 16.0% del empleo femenino.

En el último Informe Técnico "Demografía Empresarial" del INEI se reportó que durante el IV trimestre del año 2021 a nivel nacional 45 mil 121 empresas conformadas como personas naturales fueron dadas de alta, es decir empresas que fueron creadas, se reactivaron o empezaron a realizar una actividad económica; de ese total 55,7% fueron conducidas por mujeres y el 44,3% conducidas por hombres. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo se registró que del total de 9 mil 879 empresas dadas de baja, aquellas que dejaron de operar ya sea por el cierre o cese definitivo de sus actividades, suspensión temporal o fallecimiento, un 52,8% eran empresas conducidas por mujeres, mientras que el 47,2% eran conducidas por hombres. Por lo que pese a que existe un gran porcentaje de empresas conducidas por mujeres también son el grupo que cesan o cierran sus actividades en mayor proporción.

Aunado a ello, se tiene que una de las fuentes más importantes de empleo para las mujeres en el Perú, esto es, las MYPES, vieron limitado su crecimiento por bajos niveles de productividad y dificultades para acceder a financiamiento, según lo reportado en la Nota técnica N° IDB-TN-2147 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados que pesa sobre las mujeres conlleva menor tiempo disponible para desarrollar sus actividades económicas y generar ingresos propios, en armonía con su vida familiar y personal. Al respecto, la Encuesta Nacional

de Uso del Tiempo del año 2010 advirtió que las mujeres trabajan semanalmente 9 horas con 15 minutos más que los hombres, pero tienen menos ingresos.

Por tanto, aun cuando existen avances en la inserción de la mujer en la economía, particularmente en su participación en calidad de conductoras o trabajadoras de micro y pequeñas empresas, factores como la pobreza de tiempo resultante de la sobrecarga de trabajo doméstico o de cuidados, menores oportunidades de acceso a financiamiento o capacitación e información, limitan su desarrollo pleno; e inclusive ponen en riesgo el sostenimiento de sus micro y pequeñas empresas. Resultando perjudicial para el desarrollo económico nacional en un contexto de reactivación económica que demanda asegurar el sostenimiento de todas las actividades económica.

Tomando en cuenta la problemática descrita en los párrafos precedentes, es necesario evaluar la inclusión de las siguientes medidas en cualquier iniciativa destinada a promover el desarrollo de las MYPE:

1. Cuotas de participación de mujeres emprendedoras en los espacios de planificación y diseño de programas dirigidos a microemprendimientos.
2. Cuotas de participación de mujeres emprendedoras en las actividades de capacitación tecnológica.
3. Cuotas de acceso de asociaciones de mujeres emprendedoras en programas y medidas de fomento al desarrollo empresarial; fondos y financiamiento.
4. Cuotas de acceso a las contrataciones de Estado de emprendimientos conducidos por mujeres.
5. Promoción de la participación de emprendimientos liderados por mujeres en ferias internacionales, nacionales, regionales y locales y en los circuitos de exportación.
6. Generación de data diferenciada por sexo respecto de la participación de mujeres en la conducción de micro y pequeños emprendimientos.
7. Coordinación intersectorial con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la identificación e implementación de medidas que garanticen el sostenimiento de los emprendimientos liderados por mujeres.
8. Articulación de los gobiernos subnacionales con las Redes Regionales de Mujeres Emprendedoras y Empresarias.

Falta de justificación de la necesidad de las propuestas contenidas en la Autógrafa de Ley

Dentro de este contexto, debemos mencionar que el artículo 2 de la Ley N° 26889, Ley marco para la producción y sistematización legislativa, establece que los proyectos normativos deben estar debidamente sustentados en una exposición de motivos. Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de la señalada Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, precisa que la exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta normativa con una explicación de los aspectos más relevantes.

Asimismo, el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República15 señala que la Exposición de Motivos contiene la fundamentación de la propuesta, la cual "*contiene la identificación del problema, análisis del estado actual de la situación fáctica o jurídica*

[15] CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Manual de Técnica Legislativa, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR. Página 83.

que se pretende regular o modificar y la precisión del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley, el análisis del marco normativo; y, cuando corresponda, el análisis de las opiniones sobre la propuesta".

El artículo 3 del citado Reglamento señala que como parte del análisis costo beneficio se debe sustentar la necesidad de la norma, la que debe estar justificada por la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para su solución. En ese mismo sentido, cabe destacar que el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República dispone que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, y el análisis costo-beneficio de la futura norma legal.

El análisis costo beneficio realiza *"(...) el análisis del impacto social, económico, institucional, político y ambiental de la norma propuesta en el dictamen, cuando corresponda. Informa y demuestra que el impacto de la propuesta legislativa en el aumento del bienestar social es mayor que el costo de su vigencia. Se debe evitar la frase genérica La presente ley no irroga gasto al Estado*"[16]. Es un marco conceptual que se utiliza para medir el impacto y los efectos de las propuestas normativas sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general[17]. En esa línea, el adecuado desarrollo del análisis costo beneficio debe permitir advertir la necesidad y oportunidad de la regulación. Asimismo, dicho análisis integral "debe incluir las razones por las cuales la norma no solo es viable sino que es necesaria"[18].

Respecto al **artículo 3 de la Autógrafa de Ley**, no se entiende el motivo de incluirse en su ámbito de aplicación a las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad exclusiva o común, pues dichos entes no son considerados como emprendimientos conforme al concepto incluido en la Autógrafa, ya que no realizan actividades económicas.

Al respecto, el **artículo 11 de la Autógrafa de Ley** dispone la implementación de un sistema de constitución de emprendimientos en línea a cargo de 5 entidades, debiendo concluir dicho procedimiento en un plazo no mayor de 48 horas; no obstante, ni el Dictamen que sustenta dicha propuesta ni las exposiciones de motivos de los Proyectos de Ley acumulados evalúan que actualmente se encuentra implementado el Sistema de Intermediación Digital a cargo de la SUNARP, que cumpliría la misma finalidad.

El **literal a) del numeral 21.3 del artículo 21 de la Autógrafa de Ley** establece como criterio para acceder al beneficio de la retención del diez por ciento (10%) por parte de los Mype, en contratos de ejecución de obra, que el monto del contrato corresponda a un proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, a una adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa pública. Sobre el particular, se observa el referido literal a) en la medida que los tipos de procedimientos de selección a los que hace referencia la Autógrafa de Ley corresponden a una normativa del régimen general de contrataciones que a la actualidad no se encuentra vigente.

---

[16] CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Manual de Técnica Legislativa, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR. Página 91 y 92.

[17] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Guía de Técnica Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo. Lima, 2018, p. 58.

[18] ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. Guía para la evaluación de proyectos de ley. Lima, 2008, p. 33.

Por otro lado, en relación al **artículo 46 de la Autógrafa de Ley**, tomando en consideración los bienes jurídicos protegidos como son la salud y el acceso a la seguridad social (salud y pensiones), no se encuentra sustento para no considerar dentro del régimen especial aplicable a los micro emprendimientos la obligación de contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) cuando la actividad que se realiza esté comprendida en el Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, recientemente actualizado mediante el Decreto Supremo N° 008-2022-SA.

Asimismo, la **Tercera Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley** crea, entra otros, el Registro Nacional MYPE, a cargo del Ministerio de la Producción; no obstante, no se justifica la necesidad de la creación de dicho registro al contarse con el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), el cual constituiría la base del Registro Nacional MYPE, cuya administración se encuentra a cargo de la SUNAT, no existiendo evidencia suficiente en el dictamen que sustenta la Autógrafa de Ley, que permita concluir que su transferencia al Ministerio de la Producción redundará en un mayor beneficio.

Por su parte, la **Cuarta Disposición Complementaria Final** dispone que los MYPE están exonerados del setenta por ciento (70%) de los derechos de pago previstos en el TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), por los trámites y procedimientos que efectúan ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Asimismo, el literal a) de la Única Disposición Complementaria Transitoria señala que el proceso de formalización que comprende la inscripción registral y demás trámites ante entidades del Poder Ejecutivo para el funcionamiento de los microemprendimientos señalados en la Autógrafa de Ley son gratuitos. Al respecto, no se cuenta con la evidencia suficiente para demostrar si la reducción del cobro por derechos de tramitación resultará más beneficiosa o generará un efecto que resultará inversamente proporcional favoreciendo una mayor demanda y, por ende, un aumento en el número de solicitudes a ser presentadas ante el MTPE y otras entidades del Poder Ejecutivo para su funcionamiento. Por otro lado, no se ha establecido un plazo y objetivos claramente identificables, que una vez conseguidos llevaría a la culminación de vigencia temporal. La carencia de recursos derivados de una medida como esta podría conllevar una grave afectación en el funcionamiento de esas entidades debido a la ausencia de los recursos económicos necesarios para la prestación de los trámites, aspecto que no es abordado en el dictamen que sustenta la Autógrafa de Ley, el mismo que no cuenta con un adecuado análisis costo beneficio, como exige la normativa de la materia.

Por otro lado, la **Segunda Disposición Complementaria Modificatoria** plantea modificar el artículo 39 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo (LGIT), entre otros, en el siguiente extremo:

> *"39.2 En la fiscalización por incumplimiento de obligaciones laborales por los micro o pequeños emprendimientos definidos en la presente ley, siempre que se trate de infracciones previstas en el literal a) del artículo 31, ante la primera infracción detectada por la autoridad o incurrida no detectada y comunicada por el infractor, corresponde aplicar con antelación a cualquier otra sanción una medida educativa por cada tipo de infracción formal".*

Al respecto, no resulta razonable suspender toda acción que lleve al establecimiento de sanciones contra aquellos empleadores que vulneren los derechos en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, constitucionalmente y legalmente reconocidos a los trabajadores. La inexistencia, por más transitoria que sea, de una medida disuasiva en el Sistema de Inspección del trabajo le resta fuerza a la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa sociolaboral y, en especial, la seguridad y

salud en el trabajo; además de apartarse de los compromisos internacionalmente asumidos por nuestro Estado ante la OIT (art. 18 del Convenio 81).

De otro lado, esta disposición modificatoria señala lo siguiente en el artículo 39 de la LGIT: *"El incumplimiento de la medida educativa da lugar a la sanción prevista en el presente código para la infracción correspondiente"*. Al respecto, el término "código" es inadecuado porque lo correcto debería ser la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Por otro lado, en el expediente sobre la Autógrafa de Ley (el cual se encuentra en el Sistema Virtual del Congreso de la República) no se evidencia que se haya realizado **(i)** un análisis sobre si el Régimen Especial Laboral MYPE permitió alcanzar la formalización laboral, **(ii)** ni la consulta a los respectivos interlocutores sociales, conforme recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Recomendación N° 189, Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas[19]. En ese sentido, se recomienda al legislador tener en cuenta la recomendación de la OIT, a fin de contar con una propuesta legislativa que recoja los aportes y apreciaciones de los actores involucrados, en especial, de los trabajadores.

En tal sentido, el dictamen que sustenta la Autógrafa de Ley carece de una adecuada justificación respecto a la necesidad y conveniencia de su aprobación, en los términos señalados en la normatividad citada.

Desde el ámbito presupuestario

Respecto a la creación de los fondos denominados "Fondos para emprendimientos dinámicos y de alto impacto" y "Fondo de Pensiones Sociales", es preciso indicar que, conforme a lo establecido en el numeral 74.1 del artículo 74 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se encuentra prohibida la creación de fondos u otros que conlleven gastos que no se encuentren enmarcados dentro de las disposiciones del mencionado Decreto Legislativo

Asimismo, cabe indicar que, en el Análisis Costo – Beneficio de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 1258/2021-CR, antecedente de la Autógrafa de Ley, se señala que la propuesta normativa *"(...) establece una hoja de ruta de diversas acciones que el Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción y los sectores competentes deben efectuar para lograr la formalización, el fortalecimiento, la competitividad, el acceso al mercado y servicios financieros. Por tanto, no es una iniciativa de gasto y no vulnera el artículo 79 de la Constitución Política, porque se encarga de una serie de medidas que deben ser presupuestadas y realizadas por el Ejecutivo* (...)", y asimismo, en la Exposición de Motivos del Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 271/2021-CR, 010/2021-CR, 343/2021-CR, 579/2021-CR, 606/2021-CR, 613/20121-CR, 865/2021-CR, 1258/2021-CR, 1296/2021-CR y 1834/2021-CR, antecedente de la Autógrafa de Ley, se señala que *"(...) Respecto al impacto económico o presupuestal de la norma que se propone, debemos precisar dos aspectos: Primero, el texto normativo de la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Emprendedores del Perú está*

[19] "7. Para la formulación de tales políticas, los Miembros deberían, cuandoproceda:
(...)
(3) examinar la legislación laboral y social, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, para determinar:
(a) si esta legislación se ajusta a las necesidades de las pequeñas ymedianas empresas y asegura una protección y condiciones de trabajo adecuadas para sus trabajadores; (...)"

compuesto por disposiciones que forman parte de normas que se encuentran vigentes, actualmente agrupadas en el TUO Mype (...) Dichas disposiciones no generan impacto económico ni presupuestal alguno. Segundo, existen nuevas disposiciones que requieren implementación y por tanto podrían generar cierto impacto económico. En este caso, para evitarlo, se ha recogido la recomendación efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas e incorporado una disposición complementaria mediante la cual se establece que la implementación de dichas disposiciones se efectuará con cargo al pliego presupuestal de los sectores o entidades implicadas, sin generar costo adicional al erario nacional (...)".

Además, si bien la Autógrafa de Ley, en su Novena Disposición Complementaria Final, contempla que su implementación se financia con cargo a los recursos de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, se identifica acciones y disposiciones asociadas al establecimiento de programas para la creación, desarrollo y competitividad de los emprendimientos, la implementación de un sistema de constitución de emprendimientos en línea, el establecimiento de oficinas especializadas para brindar asistencia técnica y acompañamiento gratuito a los MYPE, la implementación de un plan integral de formalización MYPE y de la Ventanilla Única MYPE, la incorporación de representantes de los micro o pequeños emprendimientos en las OCEX, el cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos dinámicos y de alto impacto, aportes del Estado para la constitución de Fondos, así como la creación de registros, entre otros, respecto a los cuales no se incluye un análisis de costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos, ni la evaluación que demuestre la disponibilidad de recursos en los Pliegos involucrados, que puedan ser destinados en el presente año, así como para los años subsiguientes, de manera que se demuestre la posibilidad de su implementación, financiamiento y sostenibilidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Con relación a la propuesta normativa contenida en el **numeral 40.1 del artículo 40 de la Autógrafa de Ley**, que implicaría brindar un crédito tributario por gastos en capacitación a las MYPE, que se aplicaría contra el Impuesto a la Renta; cabe indicar que la aplicación de la misma tendría un impacto en la recaudación tributaria, por lo que su implementación disminuiría los ingresos previstos para el financiamiento del Presupuesto del Sector Público, cuyo impacto se observaría en la ejecución del Flujo del Tesoro Público en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Dicha medida contravendría en particular el Principio de Oportunidad del Decreto Legislativo N° 1441, en tanto afectaría la disponibilidad de los recursos del Tesoro Público para la atención de las obligaciones contenidas en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público. La magnitud del impacto en la disminución de la disponibilidad de los recursos del Tesoro Público para la ejecución del gasto del Sector Público no se puede cuantificar, en tanto no se dispone de dicha información.

Asimismo, en el **artículo 64** de la citada propuesta legislativa se señala que, para el caso de aquellos que opten por afiliarse a la ONP a través de dicho Sistema, y que perciban una remuneración no mayor a 1,5 de la remuneración mínima vital, el Estado les brindaría un aporte a través del otorgamiento de un Bono de Reconocimiento emitido por la ONP, el cual contaría con su garantía. Precisa además que, en ningún caso, el aporte del Estado (a través del bono) sería mayor a la suma equivalente a los aportes del afiliado. Al respecto, cabe señalar que el Bono de Reconocimiento es un certificado, garantizado por el Estado, que otorga la ONP a sus afiliados, con el cual se reconocen los aportes realizados por estos al Sistema Nacional de Pensiones y que serán transferidos a una AFP, en caso el trabajador se afilie a este último sistema. De producirse la jubilación, invalidez total, permanente y definitiva o fallecimiento, el dinero

del valor actualizado del Bono de Reconocimiento ingresa a la cuenta del afiliado para ser parte del capital de su pensión. En ese sentido, utilizar la figura del Bono de Reconocimiento como fuente de financiamiento del Sistema de Pensiones Sociales que se pretende crear para las MYPE, constituiría un subsidio que generaría un pasivo contingente explícito para el Tesoro Público (cuya magnitud se desconoce), además de desvirtuar la figura para la cual fue creado dicho Bono, esto es reflejar los aportes efectivamente realizados por los afiliados.

Con relación a la propuesta del **artículo 74 de la Autógrafa de Ley**, referido a la creación de un Fondo de Pensiones Sociales a ser financiado, entre otros, con aportes del Estado, conforme se señala en el **literal b) de los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75**; cabe señalar que no queda claro cuál sería el mecanismo de transferencia de los recursos que se destinen para fines de dichos aportes, por lo que no es posible evaluar el impacto que tendría la implementación de la citada medida en el flujo de caja del Tesoro Público. Finalmente, en **la Primera Disposición Complementaria Final de la Autógrafa de Ley** se hace mención a un "Fondo para negociación de facturas" que administraría COFIDE, para financiar el descuento de facturas provenientes de las Mype; sin embargo, en la citada propuesta no se señala o especifica con cargo a qué recursos se constituiría dicho Fondo, o de dónde provendría su financiamiento, lo que se requiere conocer a efectos del análisis pertinente

Por lo antes expuesto, la Autógrafa de Ley vulneraría las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, que establece que todo proyecto normativo debe contar con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público y un análisis de costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos.

Así también, se advierte que, de implementarse la propuesta normativa, se contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, dado que la misma implicaría demandas adicionales que no han sido previstas en la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. Adicionalmente, considerando que la Autógrafa de Ley es una iniciativa congresal, vulnera el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, que establece que: "*Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto (...)*".

Por las razones expuestas, se observa la Autógrafa de Ley, en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú.

Atentamente,

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY PARA LA FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

El objeto de esta ley es establecer el marco regulatorio para la formalización, el desarrollo y la competitividad de los micro y pequeños emprendimientos, como actores importantes en el crecimiento social y económico del país.

Artículo 2. Finalidad de la Ley

La finalidad de esta ley es contribuir a la concreción del derecho al desarrollo personal y familiar, así como el acceso al empleo sostenible y digno.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

Están comprendidos en la presente ley:

1. *Los microemprendimientos y los pequeños emprendimientos conforme a las disposiciones para cada caso.*
2. *Las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad exclusiva y común, así como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, solo en cuanto al régimen laboral establecido para los microemprendimientos o microempresas respecto de los trabajadores que les prestan servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y cuando no excedan de diez (10) trabajadores.*
3. *Los emprendedores dedicados a la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras infusiones y de quinua, maca y kiwicha, considerados en la Ley 30198, respecto a los beneficios establecidos para los microemprendimientos o microempresas.*

4. *En la presente ley, con el uso del acrónimo Mype se hace referencia a los micro y pequeños emprendimientos o micro y pequeñas empresas; y con el término emprendedor se hace referencia a su titular o conductor.*

Artículo 4. Exclusiones

No están comprendidos en la presente ley ni pueden acogerse a los beneficios que establece:

1. *Los emprendimientos que, no obstante cumplir con las características establecidas en el artículo 8, conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplen con dichas características, falseen información o dividan sus unidades empresariales, bajo sanción de inhabilitación temporal prevista en el literal b), artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF.*
2. *Las unidades económicas o empresas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines.*

Artículo 5. Rol del Estado

El Estado, a través de los tres niveles de gobierno:

1. *Establece políticas o programas para la creación, desarrollo y competitividad de los emprendimientos, para mejorar la administración, competitividad, asociación empresarial, tecnificación, así como la articulación productiva y comercial que favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de los emprendedores.*
2. *Fomenta el desarrollo integral y facilita el acceso a los servicios empresariales y a los nuevos emprendimientos, con el fin de crear un entorno favorable a su competitividad, promoviendo la conformación de mercados de servicios financieros y no financieros, de calidad, descentralizado y pertinente a las necesidades y potencialidades del emprendimiento.*

Artículo 6. Lineamientos básicos del rol del Estado

El rol del Estado observa los siguientes lineamientos básicos:

a) Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido empresarial, a través de la articulación inter e intrasectorial, regional y de las relaciones entre unidades productivas, fomentando al mismo tiempo la asociatividad y agremiación y la integración en cadenas productivas y distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas para la generación de empleo y desarrollo socioeconómico.

b) Fomenta el emprendimiento y creatividad y promueve la iniciativa e inversión privada, interviniendo para complementar las acciones que realiza el sector privado en apoyo al emprendedor.

c) Busca la eficiencia de la intervención pública, a través de la especialización o profesionalización por actividad económica y de la coordinación y concertación interinstitucional.

d) Difunde la información y datos estadísticos que construye y que, gestionados de manera pública o privada, representa un elemento de promoción, competitividad y conocimiento de la realidad de los emprendimientos.

e) Prioriza el buen uso de los recursos destinados para la promoción, financiamiento y formalización de los Mype organizados en consorcios, conglomerados o asociaciones.

f) Propicia el acceso, en condiciones de igualdad de los hombres y mujeres que conducen o laboran en un micro o pequeño emprendimiento, a las oportunidades que para ellos ofrecen los programas de servicios de promoción, formalización y desarrollo o las políticas públicas.

g) Promueve la participación de los actores locales representativos de la correspondiente actividad productiva de los micro y pequeños emprendimientos, en la implementación de programas, políticas e instrumentos, en los espacios regionales y locales o en las cadenas productivas y distributivas.



h) *Prioriza y garantiza el acceso de los Mype a mecanismos eficientes de protección de los derechos de propiedad intelectual.*

i) *Promueve el aporte de la cooperación técnica de los organismos internacionales, orientada a la administración, competitividad, asociación empresarial, tecnificación, así como la articulación productiva y comercial de los Mype.*



j) *Promueve la prestación de servicios empresariales por parte de las universidades, a través de incentivos en las diferentes etapas de los proyectos de inversión, estudios de factibilidad y mecanismos de facilitación para su puesta en marcha.*

Artículo 7. Definición de emprendimiento y emprendedor

7.1 El emprendimiento es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto realizar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Los emprendimientos se clasifican según las características establecidas en el artículo 8.

7.2 El emprendedor es la persona titular o integrante de un micro o pequeño emprendimiento conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 8. Características y definición del emprendimiento

El emprendimiento que cuenta con:

1. *Ventas anuales hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT) se denomina microemprendimiento o microempresa.*
2. *Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT) se denomina pequeño emprendimiento o pequeña empresa.*

CAPÍTULO II

FORMALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Artículo 9. Acceso a la formalización

El Estado fomenta la formalización del emprendimiento a través de la simplificación de los procedimientos de registro, control o fiscalización y mediante el acceso a los beneficios establecidos en la presente ley.

Artículo 10. Personería jurídica

10.1 Para acogerse a la presente ley, los microemprendimientos no necesitan constituirse como persona jurídica, pueden ser conducidos directamente por su propietario persona individual.

10.2 El microemprendimiento puede adoptar voluntariamente la forma de empresa individual de responsabilidad limitada o cualquiera de las formas societarias previstas en el ordenamiento jurídico nacional.

10.3 En caso de efectuarse aportes dinerarios al momento de la constitución como persona jurídica, el monto que figura como pagado se acredita con declaración jurada del gerente del Mype, lo que quedará consignado en el documento de constitución.

10.4 La constitución e inscripción registral del microemprendimiento que opta por las modalidades previstas en el numeral 10.2, cuyo capital no exceda las cuatro (4) unidades impositivas tributarias, se realiza a través del procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1409 para la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) y goza de la exoneración del pago de tasas registrales prevista en la segunda disposición complementaria del Decreto Legislativo 1332, Decreto Legislativo que facilita la constitución de empresas a través de los centros de desarrollo empresarial (CDE). La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), en un plazo de noventa (90) días calendario contados desde la publicación del reglamento de la presente ley, aprueba los formatos estandarizados, adecúa los aspectos técnicos del SID-SUNARP, las plataformas digitales, así como el servicio gratuito de asesoramiento y

acompañamiento para la constitución y registro, atendiendo las disposiciones previstas en la Ley 26887, Ley General de Sociedades.

Artículo 11. Constitución de emprendimientos en línea, simplificación de procedimientos y ventanilla única

11.1 El Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) implementan un sistema de constitución de emprendimientos en línea, debiendo concluir dicho procedimiento en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.

11.2 El Ministerio de la Producción, en coordinación con los sectores competentes y en un plazo de ciento veinte (120) días calendario, implementa un plan integral de formalización Mype, así como la Ventanilla Única Mype que permita la interoperabilidad y simplificación de trámites y procedimientos que realizan los Mype.

CAPÍTULO III

INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MYPE

Artículo 12. Instrumentos de promoción

Los instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad de los Mype constituidos y de los nuevos con capacidad innovadora son:

a) Los mecanismos de acceso a los servicios de desarrollo empresarial y aquellos que promueven el desarrollo de los mercados de servicios.

b) Los mecanismos de acceso a los servicios financieros y aquellos que promueven el desarrollo de dichos servicios.

c) Los mecanismos que facilitan y promueven el acceso al mercado nacional e internacional, así como a la información estadística referida a los emprendimientos.

d) Los mecanismos que facilitan y promueven la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la creación del emprendimiento innovador.

CAPÍTULO IV

PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Artículo 13. Profesionalización, capacitación y asistencia técnica del emprendedor

13.1 El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve la profesionalización, la capacitación tecnológica y la asistencia técnica de los Mype. Elabora, con participación de los representantes de las organizaciones de emprendedores, el plan y programas estratégicos respectivos; asimismo, establece los mecanismos necesarios para su implementación y ejecución.

13.2 Para acceder a la profesionalización, capacitación y asistencia técnica el emprendedor debe acreditar que su emprendimiento se encuentra formalizado conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 14. Profesionalización del emprendedor

14.1 Los institutos técnicos, tecnológicos e instituciones de educación superior públicos pueden establecer carreras para la formación técnica y posterior profesionalización de los emprendedores.

14.2 Las universidades públicas, en el marco de su autonomía, funciones y competencias, pueden crear carreras profesionales que hagan posible la profesionalización establecida en el numeral 14.1.

14.3 Las universidades públicas, los institutos técnicos y tecnológicos superiores e instituciones de educación superior públicas establecen diplomados, programas de formación no profesional, programas de extensión, entre otros, para la profesionalización del emprendedor.

Artículo 15. Capacitación tecnológica

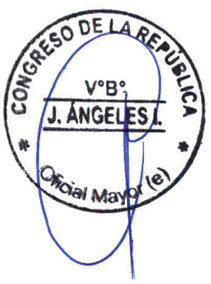
La capacitación tecnológica del emprendedor:

1. *Comprende la generación de conocimiento tecnológico para la innovación en procesos, productos, servicios y demás aspectos relacionados con dicho conocimiento orientados a mejorar la producción o productividad.*
2. *La realizan las universidades o institutos tecnológicos del país o del exterior. También puede realizarse mediante pasantías en centros*



tecnológicos del exterior u otros mecanismos que permitan conocer nuevas tecnologías para los emprendimientos.

3. Parte de los recursos del FIDECOM se asignan al financiamiento de la capacitación en conocimiento tecnológico. Para tal efecto, se incorpora al emprendedor de la micro y pequeña empresa como beneficiario de la Ley 29152, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM.



<u>Artículo 16</u>. Asistencia técnica

El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en el ámbito de sus competencias, establecen oficinas especializadas para brindar asistencia técnica y acompañamiento gratuito a los Mype. La asistencia técnica comprende:

a) Creación y gestión de emprendimientos.

b) Organización y asociatividad.

c) Comercialización, mercadotecnia y negocios internacionales.

d) Financiamiento de emprendimientos.

e) Actividades económicas estratégicas e inteligencia empresarial.

f) Tributación.

g) Exportaciones o internacionalización.

h) Fiscalización laboral.

i) Otras actividades conexas.

<u>Artículo 17</u>. Participación de la empresa y la universidad privada en la capacitación tecnológica y asistencia técnica

17.1 La empresa privada puede participar en la capacitación tecnológica y en la asistencia técnica a los trabajadores y conductores de los emprendimientos, sin que ello genere costos al Estado ni al emprendedor.

17.2 La universidad privada puede participar en la profesionalización de los emprendedores.

17.3 *El reglamento de la presente ley establece el procedimiento para la participación de la empresa privada y la universidad privada.*

Artículo 18. Acceso voluntario al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)

Los emprendimientos que pertenecen al sector industrial manufacturero o que realicen servicios de instalación, reparación y mantenimiento y que no están obligados al pago de la contribución al SENATI quedan comprendidos a su solicitud, en los alcances de la Ley 26272, Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial (SENATI), siempre que contribuyan con el pago de acuerdo con la escala establecida por el consejo nacional de dicha entidad.

CAPÍTULO V

ACCESO A LOS MERCADOS Y A INFORMACIÓN

Artículo 19. Mecanismos de facilitación

Son mecanismos de facilitación y promoción de acceso a los mercados: la asociatividad empresarial, las compras estatales, la comercialización local e internacional, la promoción de las exportaciones y la participación de los emprendedores en las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) y la información sobre los Mype.

Artículo 20. Asociatividad empresarial

20.1 *Los Mype, sin perjuicio de las formas societarias previstas en las leyes sobre la materia, pueden asociarse para tener mayor acceso al mercado privado nacional e internacional y a las compras estatales. La asociatividad empresarial debe ser entendida como el esfuerzo de cooperación interempresarial que tiene como objetivo mejorar la gestión, la productividad y la competitividad, permitiendo el complemento de capacidades, mejora en las negociaciones, distribución de costos, entre otros. Todos los beneficios y medidas de promoción para que los Mype participen en las compras estatales incluyen a los consorcios que aquellos establezcan.*

20.2 *El acceso a los programas y medidas de fomento al desarrollo empresarial será articulado de modo que permita priorizar a aquellas empresas que se agrupen en unidades asociativas o clusters o se inserten en procesos de subcontratación o cadenas productivas de exportación.*

Artículo 21. Compras estatales

21.1 *Los Mype participan en las contrataciones del Estado, de acuerdo con la normatividad correspondiente. El Ministerio de la Producción facilita el acceso de estos a las contrataciones del Estado. En la contratación de bienes y servicios, así como en la ejecución y consultoría de obras, las entidades del Estado prefieren a los ofertados por los Mype, siempre que cumplan con las condiciones requeridas. El reglamento establece los procedimientos y mecanismos para la aplicación de esta norma.*

21.2 *En los contratos de suministro periódico de bienes, prestación de servicios de ejecución periódica, ejecución y consultoría de obras que celebren los emprendedores, podrán optar, como sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención de parte de las entidades públicas de un diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuará de forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.*

21.3 *En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo será procedente cuando:*

a) *Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, a una adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa pública.*

b) *El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.*

c) *El pago a favor del contratista considere, cuando menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos referidos, el*

incumplimiento injustificado por parte de los contratistas beneficiados con la presente disposición, que motive la resolución del contrato, dará lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de un (1) año ni mayor de dos (2) años. Los procesos de selección se pueden llevar a cabo por etapas, tramos, paquetes o lotes. La buena pro por cada etapa, tramo, paquete o lote se podrá otorgar a Mype distintos y no vinculados económicamente entre sí, lo que no significará un cambio en la modalidad del proceso de selección.

d) Las instituciones del Estado deben programar no menos del 40% de sus contrataciones para ser atendidas por los Mype, en aquellos bienes y servicios que estos puedan suministrar. Se dará preferencia a los Mype regionales y locales del lugar donde se realicen las compras o se ejecuten las obras estatales.

Artículo 22. Ferias internacionales, nacionales, regionales y locales

22.1 El Estado, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a través de los sectores, instituciones y organismos que los conforman, apoyan y facilitan la iniciativa privada en la promoción, organización y realización de eventos feriales y exposiciones internacionales, nacionales, regionales y locales, periódicas y anuales.

22.2 La presente disposición se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de autorización de ferias y exposiciones internacionales, nacionales, regionales o locales.

Artículo 23. Promoción de las exportaciones y representantes de emprendedores en Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX)

23.1 El Estado promueve el crecimiento, diversificación y consolidación de las exportaciones directas e indirectas de los emprendedores, con énfasis en las regiones, implementando estrategias de desarrollo de mercados y de oferta exportable, así como de fomento a la mejora de la gestión empresarial, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas.

23.2 *El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en coordinación con PROMPERÚ, según sus atribuciones y competencias:*

a) *Promueve programas intensivos de apertura, consolidación y diversificación de mercados para el comercio internacional; genera, mantiene actualizado y difunde información sobre oportunidades de exportación y acceso a los mercados del exterior, que incluye demandas, directorios de importadores, condiciones arancelarias, normas técnicas, proceso de exportación y otra información pertinente; ejecutan planes estratégicos por sectores, mercados y regiones, priorizando el desarrollo de cadenas exportadoras.*

b) *Incorpora a representantes de los micro o pequeños emprendimientos en las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX). El reglamento de la presente ley establece el procedimiento y mecanismos para dicha incorporación.*

23.3 *Los consejeros o agregados económico-comerciales nombrados por MINCETUR y acreditados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, promueven alianzas estratégicas entre los Mype con los peruanos residentes en el extranjero y mercados internacionales en general.*

23.4 *PROMPERÚ apoya a los Mype a través de la implementación de la Ruta Exportadora Empresarial, Ruta Exportadora Especializada, Ruta Exportadora Avanzada u otros programas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el camino hacia su internacionalización, así como en el proceso de asociatividad.*

<u>Artículo 24</u>. Información y base de datos

El Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los demás niveles de gobierno y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mantiene actualizada la información estadística e informática sobre los Mype, así como de los registros creados en la presente ley, facilitando a las entidades de la administración estatal, a los Mype y a los ciudadanos el acceso a dicha información.

CAPÍTULO VI

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Artículo 25. Modernización tecnológica

25.1 El Estado impulsa la modernización tecnológica del tejido empresarial de los Mype y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos como elementos de soporte de un sistema nacional de innovación continua, en el marco de la nueva gobernanza de las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI), establecido en la Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti).

25.2 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), como ente rector del Sinacti, en coordinación con el Ministerio de la Producción, promueve e impulsa actividades de investigación e innovación para la modernización tecnológica y fortalecimiento de las capacidades técnicas empresariales de los Mype.

Artículo 26. Servicios tecnológicos

El Estado promueve:

1. La inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, orientada a dar igualdad de oportunidades de acceso a la tecnología y el conocimiento, con el fin de incrementar la productividad, la mejora de la calidad de los procesos productivos y productos, la integración de las cadenas productivas inter e intrasectoriales y en general a la competitividad de los productos y las líneas de actividad con ventajas distintivas. Para ello, también promueve la vinculación entre las universidades y centros de investigación con los Mype.

2. La oferta de servicios tecnológicos orientada a la demanda de los Mype, como soporte a las empresas, facilitando el acceso a fondos específicos de financiamiento o cofinanciamiento, a centros de innovación tecnológica o de desarrollo empresarial, a centros de información u otros mecanismos o instrumentos, que incluye la investigación, el diseño, la información, la

capacitación, la asistencia técnica, la asesoría y la consultoría empresarial, los servicios de laboratorio necesarios y las pruebas piloto.

CAPÍTULO VII

APOYO A LA GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Artículo 27. Sistema de procesos de calidad para los micro y pequeños emprendimientos

El Estado promueve el crecimiento de los Mype a través de programas para la adopción de sistemas de calidad, implementación y certificación en normas asociadas a la gestión de calidad de un producto o servicio para el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Artículo 28. Fondos para emprendimientos dinámicos y de alto impacto

28.1 El Estado promueve mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos empresariales, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos dinámicos y de alto impacto, los cuales deben tener un enfoque que los oriente hacia el desarrollo nacional, la internalización y la permanente innovación.

28.2 El Ministerio de la Producción puede crear programas que fomenten el cumplimiento de dicho objetivo y entregar el cofinanciamiento a que refiere el presente artículo u otorgar subvenciones a personas naturales y jurídicas privadas dentro de dicho marco.

28.3 Los programas creados se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Producción, en el marco de las leyes anuales de presupuesto y conforme a la normatividad vigente, pueden, también, ser financiados con recursos provenientes de la cooperación técnica, conforme a la normatividad vigente. Los gastos referidos al financiamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos dinámicos y de alto impacto referidos en el presente artículo y que se efectúen en el marco de los programas que se creen con



dicho fin, se aprueban mediante resolución ministerial del Ministerio de la Producción que se publica en el diario oficial El Peruano.

Artículo 29. Signo distintivo Marca Perú Emprendedor



Los Mype cuyas iniciativas de producción se enfocan en la sostenibilidad productiva y el cuidado ecológico, sanitario o ambiental contarán con un signo distintivo de reconocimiento que acompañará la marca de sus productos. Este signo distintivo se denomina Marca Perú Emprendedor. El reglamento de la presente ley establece el procedimiento para su acceso o asignación.

CAPÍTULO VIII

ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Artículo 30. Acceso al financiamiento

El Estado promueve:

1. *El acceso de los Mype al mercado financiero y al mercado de capitales, fomentando la expansión, solidez y descentralización de dichos mercados.*
2. *El fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS); asimismo, promueve la incorporación al sistema financiero de las entidades no reguladas que proveen servicios financieros a los Mype.*

Artículo 31. Participación de las entidades financieras del Estado

31.1 *La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Banco de la Nación y el Banco Agropecuario (AGROBANCO) promueven y articulan integralmente a través de los intermediarios financieros el financiamiento a los Mype, diversificando, descentralizando e incrementando la cobertura de la oferta de servicios de los mercados financieros y de capitales.*

31.2 *Son intermediarios financieros elegibles para utilizar los recursos de las entidades financieras del Estado para el financiamiento a los Mype, los considerados en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias. Complementariamente, se podrá otorgar facilidades*

financieras a las instituciones de microfinanzas no reguladas. El reglamento contemplará medidas y acciones específicas al respecto.

Artículo 32. Funciones de COFIDE en la gestión de negocios de los emprendedores

COFIDE, en el marco de la presente ley, ejercerá las siguientes funciones:

a) Diseñar metodologías para el desarrollo de productos financieros y tecnologías que faciliten la intermediación a favor de los Mype, sobre la base de un proceso de estandarización productiva y financiera, posibilitando la reducción de los costos unitarios de la gestión financiera y generando economías de escala de conformidad con lo establecido en el numeral 44 del artículo 221 de la Ley 26702 y sus modificatorias.

b) Predeterminar la viabilidad financiera desde el diseño de los productos financieros estandarizados, los que deben estar adecuados a los mercados y ser compatibles con la necesidad de financiamiento de cada actividad productiva y de conformidad con la normatividad vigente.

c) Implementar un sistema de calificación de riesgos para los productos financieros que diseñe en coordinación con la SBS.

d) Gestionar la obtención de recursos y canalizarlos a las empresas de operaciones múltiples consideradas en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para que destinen dichos recursos financieros a los Mype.

e) Colaborar con la SBS en el diseño de mecanismos de control de gestión de los intermediarios.

f) Coordinar y hacer el seguimiento de las actividades relacionadas con los servicios prestados por las entidades privadas facilitadoras de negocios, promotores de inversión, asesores y consultores de los Mype, que no se encuentren reguladas o supervisadas por la SBS o por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), para efectos del mejor funcionamiento integral del sistema de financiamiento y la optimización del uso de los



recursos. COFIDE adopta las medidas técnicas, legales y administrativas necesarias para fortalecer su rol de fomento en beneficio de los Mype para establecer las normas y procedimientos relacionados con el proceso de estandarización de productos financieros destinados a los clientes potenciales y de conformidad con la normatividad vigente.



Artículo 33. Intermediarios financieros

COFIDE a efectos de canalizar hacia los Mype y entregar los fondos que gestiona y obtiene de las diferentes fuentes, incluyendo los provenientes de la cooperación técnica internacional y en fideicomiso, suscribe convenios o contratos de operación con los intermediarios financieros señalados en la presente ley, siempre que las condiciones del fideicomiso no establezcan lo contrario.

Artículo 34. Supervisión de créditos

La supervisión y monitoreo de los créditos que son otorgados con los fondos que entrega COFIDE a través de los intermediarios financieros señalados en la presente ley, se complementa a efectos de optimizar su utilización y maximizar su recuperación, con la participación de entidades especializadas privadas facilitadoras de negocios, tales como promotores de inversión; de proyectos y de asesorías y de consultorías de los Mype, siendo retribuidos estos servicios en función de los resultados previstos.

Artículo 35. Fondos de garantía y capital de riesgo para los micro y pequeños emprendimientos

35.1 COFIDE destina un porcentaje de los recursos financieros que gestione y obtenga de las diferentes fuentes para el financiamiento de los Mype, siempre que los términos en que les son entregados los recursos le permitan destinar parte de los mismos para conformar o incrementar fondos de garantía, que en términos promocionales faciliten el acceso de los Mype a los mercados financieros y de capitales, a la participación en compras estatales y de otras instituciones.

35.2 El Estado promueve el desarrollo de fondos de inversión de capital de riesgo que adquieran una participación temporal en el capital de los Mype



innovadores que inicien su actividad y de las existentes con menos de dos años de funcionamiento.

Artículo 36. Centrales de riesgo

El Estado, a través de la SBS, crea y mantiene un servicio de información de riesgos especializado en emprendimientos, de conformidad con lo señalado por la Ley 27489, Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de información, y sus modificatorias.



Artículo 37. Cesión de derechos de acreedor a favor de las instituciones financieras reguladas por la Ley del Sistema Financiero

37.1 En los procesos de contratación de bienes y servicios que realicen las entidades públicas con los Mype, una vez adjudicada la buena pro a favor de cualquiera de estos, podrán ceder su derecho de acreedor a favor de las instituciones financieras reguladas por la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

37.2 Solo podrán ceder sus derechos a las entidades financieras del Estado, los Mype que hubieran celebrado contratos con el Estado derivados de procesos de selección de licitación pública, concurso público y adjudicación directa en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Esa cesión de derechos no implica traslado de las obligaciones contraídas por los Mype.

Artículo 38. Pronto pago del Estado

38.1 Las entidades deben pagar las contraprestaciones pactadas a favor de los Mype en los términos dispuestos en el Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, bajo responsabilidad. De no proceder con el pago en la oportunidad establecida, los funcionarios y servidores de la entidad incurren en responsabilidad administrativa, civil o penal según corresponda. Para tal efecto, la Contraloría General de la República, a



través de las oficinas de control institucional, y en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica la correcta aplicación de lo dispuesto en el presente numeral.



38.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con los demás sectores, publica de manera gradual las listas de entidades que a nivel de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local realicen el pago en el menor plazo, así como otras políticas que incentiven las buenas prácticas en la contratación pública; asimismo, en un plazo de treinta (30) días hábiles, establece un plan de medidas, en los sistemas administrativos bajo su rectoría, que incentive el pronto pago a los proveedores de bienes y servicios.

38.3 El Ministerio de Economía y Finanzas informa a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, anualmente o cuando se le solicite, el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 38.2.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

Artículo 39. Régimen tributario de los micro y pequeños emprendimientos

39.1 El régimen tributario facilita la tributación de los Mype y permite que un mayor número de emprendedores se incorpore a la formalidad.

39.2 El Estado promueve campañas de difusión sobre el régimen tributario, en especial el de aplicación a los Mype con los sectores involucrados.

39.3 La SUNAT adopta las medidas técnicas, normativas, operativas y administrativas necesarias para fortalecer y cumplir su rol de entidad administradora, recaudadora y fiscalizadora de los tributos de los Mype.

Artículo 40. Crédito por gastos de capacitación

40.1 Los Mype generadores de renta de tercera categoría que se encuentren en el régimen general y efectúen gastos de capacitación tienen derecho a un crédito tributario contra el impuesto a la renta equivalente al monto de



dichos gastos, siempre que no exceda del 1% de su planilla anual de trabajadores del ejercicio en el que devenguen dichos gastos.

40.2 Los programas de capacitación deben responder a una necesidad concreta del empleador de invertir en la capacitación de su personal, que repercuta en la generación de renta gravada y el mantenimiento de la fuente productora. Asimismo, deben estar comprendidos dentro de la relación de capacitaciones que para tal efecto determinen los ministerios de la Producción y de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante decreto supremo. Dichos programas están sujetos a la certificación por parte de la entidad del Estado que establezca el reglamento.



Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Las empresas deben desarrollar las actividades económicas comprendidas en la Sección D de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas - Revisión 3.0, que se establezcan mediante decreto supremo.

b) La capacitación debe ser prestada por instituciones educativas de educación superior que resulten elegibles para la Beca Pregrado del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo creado por la Ley 29837 o componente que lo sustituya.

c) La capacitación debe estar dirigida a los trabajadores que se encuentren en planilla, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 018-2007-TR, que establece disposiciones relativas al uso del documento denominado planilla electrónica, y las normas reglamentarias relativas a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, aprobada por el Decreto Supremo 001-98-TR, o normas que las sustituyan.

d) La capacitación no debe otorgar grado académico.

e) La capacitación debe realizarse en el país y su duración es establecida mediante decreto supremo.



f) Los gastos de capacitación deben ser pagados en el ejercicio en el que devenguen.

g) Los Mype deben comunicar a la SUNAT la información que requiera en la forma, plazo y condiciones que establezca mediante resolución de superintendencia, del ejercicio en que se aplica el beneficio tributario.



40.3 Dicho crédito es aplicado en el ejercicio en el que devenguen y paguen los gastos de capacitación, y no genera saldo a favor del contribuyente ni puede arrastrarse a los ejercicios siguientes, tampoco otorga derecho a devolución ni puede transferirse a terceros. Se debe observar las siguientes reglas:

a) Para la determinación del crédito tributario no se consideran los gastos de transporte y viáticos que se otorguen a los trabajadores.

b) El monto del gasto de capacitación que se deduzca como crédito, de acuerdo con lo señalado en este artículo, no puede deducirse como gasto.

c) El beneficio tiene una vigencia de tres ejercicios a partir del ejercicio 2023.

d) La SUNAT informa anualmente al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Educación sobre las actividades económicas respecto de las que se aplique el crédito tributario.

Artículo 41. Acogimiento a la factura electrónica

41.1 El Estado fomenta el acogimiento a la factura electrónica.

41.2 Desde la inscripción en los registros correspondientes, los Mype que se acojan en la forma y condiciones que establezca la SUNAT a la factura electrónica pueden realizar el pago mensual de sus obligaciones tributarias recaudadas por dicha institución hasta la fecha de vencimiento especial que esta establezca.

CAPÍTULO X

RÉGIMEN LABORAL DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

Artículo 42. Derechos laborales fundamentales

En toda empresa, cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica o actividad, se deben respetar los derechos laborales fundamentales. Por tanto, deben cumplir lo siguiente:

a) No utilizar ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como aquel trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas autorizadas por el Código de los Niños y Adolescentes.

b) Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabajadores cumplan, como mínimo, con la normatividad legal.

c) No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o encubrir el uso de castigos corporales.

d) Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados sobre la base de raza, credo, género, origen y sobre la base de cualquier otra característica personal, creencia o afiliación. Igualmente, no podrá efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal.

e) Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y no interferir con el derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y a afiliarse o no a organizaciones legalmente establecidas.

f) Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo.

Artículo 43. Alcance del régimen laboral

El presente régimen se aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en los Mype, así como a sus conductores y empleadores.

Artículo 44. Regulación de derechos y beneficios laborales

44.1 La presente ley regula los derechos y beneficios contenidos en los contratos laborales celebrados a partir de su entrada en vigencia.

44.2 *Los contratos laborales de los trabajadores celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán rigiéndose bajo sus mismos términos y condiciones, y bajo el imperio de las leyes que rigieron su celebración.*

44.3 *El régimen laboral especial establecido en la presente ley no será aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a su entrada en vigencia y vuelvan a ser contratados inmediatamente por el mismo empleador, bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un (1) año desde el cese.*

<u>Artículo 45</u>. Difusión de las diferentes modalidades contractuales que pueden aplicar los microemprendimientos

El Estado promueve el acceso a la información de las diferentes modalidades contractuales existentes que pueden ser utilizadas por los microemprendimientos, acorde a la demanda laboral de este tipo de empresas.

<u>Artículo 46</u>. Régimen laboral especial

46.1 *Se crea el régimen laboral especial dirigido a fomentar la formalización y desarrollo de los Mype y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de estos.*

46.2 *El régimen laboral especial comprende remuneración, jornada de trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, protección contra el despido injustificado.*

46.3 *Los trabajadores de los pequeños emprendimientos tienen, además, derecho a:*

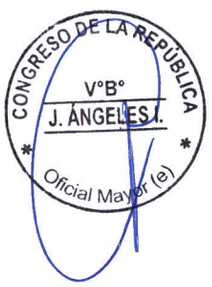
a) *Un seguro complementario de trabajo de riesgo a cargo de su empleador, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, modificatorias y normas reglamentarias.*

b) *Un seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, y modificatorias.*



c) *A los derechos colectivos, que continuarán regulándose por las normas del Régimen General de la Actividad Privada.*

d) *Participar en las utilidades, de acuerdo con el Decreto Legislativo 892 y su reglamento.*



e) *Compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen común, computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias.*

f) *Percibir dos gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas Patrias y la Navidad, siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa correspondiente, en lo que les sea aplicable. El monto de las gratificaciones es equivalente a media remuneración cada una.*

46.4 *Los trabajadores de los micro y pequeños emprendimientos comprendidos en el régimen laboral especial podrán pactar mejores condiciones laborales, respetando los derechos reconocidos en el presente artículo.*

Artículo 47. Naturaleza y permanencia en el régimen laboral especial

47.1 *El presente régimen laboral especial es de naturaleza permanente.*

47.2 *La empresa cuyo nivel de ventas promedio de dos (2) años consecutivos supere el nivel de ventas límite establecido en la presente ley para clasificar a un emprendimiento como micro o pequeño podrá conservar por tres (3) años calendario el régimen laboral especial correspondiente o en el que se registre. Luego de este periodo, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda.*

Artículo 48. Remuneración

Los trabajadores de los microemprendimientos comprendidos en la presente ley tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital.

Artículo 49. Jornada y horario de trabajo

49.1 *En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobretiempo de los trabajadores de los emprendimientos, es aplicable lo previsto por el Decreto Supremo 007-2002-TR, Texto Único Ordenado del*

Decreto Legislativo 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por la Ley 27671, o norma que lo sustituya.

49.2 En los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%.

Artículo 50. Descanso semanal obligatorio

El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen por las normas del régimen laboral común de la actividad privada.

Artículo 51. Descanso vacacional

El trabajador de los Mype que cumpla el récord establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, tendrá derecho como mínimo, a quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de servicios. En ambos casos rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo 713 en lo que le sea aplicable.

Artículo 52. Despido injustificado

52.1 El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador de los microemprendimientos es equivalente a diez (10) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias.

52.2 En el caso del trabajador de los pequeños emprendimientos, la indemnización por despido injustificado es equivalente a veinte (20) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de ciento veinte (120) remuneraciones diarias. En ambos casos, las fracciones de año se abonan por dozavos.

Artículo 53. Determinación de emprendimientos comprendidos en el régimen especial

Para ser comprendidos en el régimen especial, los emprendimientos que cumplan las condiciones establecidas en la presente ley deben presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo una declaración jurada de poseer las condiciones

indicadas, acompañando, de ser el caso, una copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior.

Artículo 54. Fiscalización laboral de los Mype

54.1 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y los gobiernos regionales realizan la fiscalización de los Mype, estableciendo metas de inspección anual no menores al veinte por ciento (20%) de los Mype, a efectos de cumplir con las disposiciones del régimen laboral especial establecido en la presente ley.

54.2 La determinación del incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas, dará lugar a que se considere al Mype y a los trabajadores de esta excluidos del régimen especial y generará el cumplimiento del íntegro de los derechos contemplados en la legislación laboral y de las obligaciones administrativas conforme se hayan generado. Debe establecerse inspecciones informativas a efecto de difundir la legislación establecida en la presente norma.

Artículo 55. Descentralización de la fiscalización

55.1 La SUNAFIL y los gobiernos regionales adoptan las medidas técnicas, normativas, operativas y administrativas necesarias para fortalecer y cumplir efectivamente la fiscalización sobre el cumplimiento de los derechos reconocidos en el presente régimen laboral especial.

55.2 La SUNAFIL celebrará convenios de cooperación, colaboración o delegación con entidades y organismos públicos para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el régimen laboral especial creado por la presente ley.

Artículo 56. Beneficios de las empresas comprendidas en el régimen especial

A efectos de contratar con el Estado y participar en los programas de promoción del mismo, los Mype deben acreditar el cumplimiento de las normas laborales de su régimen especial o de las del régimen general, según sea el caso, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse normativamente.



Artículo 57. Microemprendimientos no constituidos como personas jurídicas

57.1 Para el caso de los Mype que no se hayan constituido en personas jurídicas en los que laboren parientes consanguíneos hasta el segundo grado o el cónyuge del titular o propietario persona natural, es aplicable lo previsto en la segunda disposición complementaria de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR.



57.2 Los trabajadores con relaciones laborales existentes al momento de la entrada en vigencia del régimen especial, mantienen los derechos nacidos de sus relaciones laborales.

Artículo 58. Indemnización especial por despido de trabajador para ser reemplazado

58.1 En caso de que un trabajador que goza de los derechos del régimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por otro dentro del régimen especial, tendrá derecho al pago de una indemnización especial equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales por cada año laborado, las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. El plazo para accionar por la causal señalada caduca a los treinta (30) días de producido el despido, correspondiéndole al trabajador la carga de la prueba respecto a tal finalidad del despido.

58.2 La causal especial e indemnización mencionadas dejan a salvo las demás causales previstas en el régimen laboral general, así como su indemnización correspondiente.

CAPÍTULO XI

ASEGURAMIENTO EN SALUD

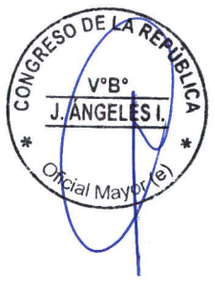
Artículo 59. Seguro social en salud

59.1 Los trabajadores de los microemprendimientos comprendidos en la presente ley serán afiliados al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. Ello se aplica, asimismo, para los conductores del microemprendimiento.



59.2 Los trabajadores de los pequeños emprendimientos serán asegurados regulares de ESSALUD y el empleador abonará la tasa correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y modificatorias.

<u>Artículo 60</u>. Régimen especial de salud para los microemprendimientos



60.1 La afiliación de los trabajadores y conductores de los microemprendimientos al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud comprenderá a sus derechohabientes. Su costo es parcialmente subsidiado por el Estado condicionado a la presentación anual del certificado de inscripción o reinscripción vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeño Emprendimiento de la SUNAT, y de la relación de trabajadores, conductores y sus derechohabientes. El procedimiento de afiliación será establecido en el reglamento de la presente ley.

60.2 El empleador debe efectuar un aporte mensual por cada trabajador afiliado, equivalente a la mitad del aporte mensual total del régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud, el que será complementado por un monto igual por parte del Estado, a fin de que el trabajador y sus derechohabientes accedan al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). La presente disposición se aplica, asimismo, en el caso de los conductores de los microemprendimientos.

Este beneficio no se extiende a los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente al componente semicontributivo del Seguro Integral de Salud, quienes, para lograr su afiliación, deben acreditar la evaluación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

CAPÍTULO XII

SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES

<u>Artículo 61</u>. Régimen de pensiones

61.1 Los trabajadores y conductores de los microemprendimientos comprendidos en la presente ley podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el Decreto Ley 19990, Ley que



Crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.



61.2 *Los trabajadores y conductores de los microemprendimientos comprendidos en la presente ley que no se encuentren afiliados o sean beneficiarios de algún régimen previsional podrán optar por el Sistema de Pensiones Sociales contemplado en la presente ley. Ello se aplica, asimismo, para los conductores de los microemprendimientos.*

61.3 *Los trabajadores de los pequeños emprendimientos deben obligatoriamente afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el Decreto Ley 19990, Ley que Crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.*

Artículo 62. Creación del Sistema de Pensiones Sociales

62.1 *Se crea el Sistema de Pensiones Sociales, de carácter obligatorio, para los trabajadores y conductores de los microemprendimientos que no superen los cuarenta (40) años de edad y se encuentren bajo los alcances de la presente norma. Es de carácter facultativo para los trabajadores y conductores que tengan más de cuarenta (40) años de edad, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.*

62.2 *Solo podrán afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales los trabajadores y conductores de los microemprendimientos. No están comprendidos en los alcances de la presente norma los trabajadores que se encuentren afiliados o sean beneficiarios de otro régimen previsional.*

62.3 *El aporte mensual de cada afiliado equivale a una tasa de aporte gradual hasta un máximo del cuatro por ciento (4%) de la remuneración mínima vital (RMV) que se establecerá mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta doce (12) aportaciones anuales. El afiliado podrá efectuar voluntariamente aportes*



mayores al mínimo. El afiliado puede elegir que sus aportes sean administrados por una administradora privada de fondos de pensiones (AFP) o por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La AFP y la ONP pueden determinar una comisión por la administración de los aportes del afiliado.



62.4 Por los aportes del afiliado a la ONP, esta debe emitir un bono de reconocimiento con garantía del Estado peruano. Las condiciones de la emisión, redención y las características del bono serán señaladas por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 63. Cuenta individual del afiliado

63.1 Se crea la cuenta individual del afiliado al sistema de pensiones sociales en la cual se registrarán sus aportes y la rentabilidad acumulados y los aportes a ser reconocidos por el Estado a través de un bono de reconocimiento de aportes emitido por la ONP.

63.2 La implementación y administración de la cuenta individual estará a cargo de la AFP o de la ONP.

Artículo 64. Aporte del Estado

64.1 El aporte del Estado se efectúa hasta una tasa de aporte determinada o por la suma equivalente de los aportes del afiliado a través de un bono de reconocimiento de aportes emitido por la ONP y garantizado por el Estado peruano. En ningún caso el aporte del Estado será mayor a la suma equivalente de los aportes del afiliado. La tasa de aporte y las condiciones de la emisión, redención y las características del bono serán señaladas por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

64.2 El pago del aporte del Estado se efectuará de conformidad con las previsiones presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.

64.3 El aporte del Estado se efectuará a favor de los afiliados que perciban una remuneración no mayor a 1,5 de la remuneración mínima vital.

Artículo 65. Pensión por situación de discapacidad

65.1 Tienen derecho a percibir la pensión por situación de discapacidad los afiliados cuando se declare su situación de discapacidad permanente total o parcial, según las normas que regulan el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, dictaminada previamente por las entidades competentes para cada sistema.

65.2 En el reglamento se establecen los requisitos y condiciones para el otorgamiento de dicha pensión.

Artículo 66. Pensión de jubilación

Tienen derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados cuando cumplan los sesenta y cinco (65) años de edad. En el Sistema Privado de Pensiones, el capital acumulado durante la etapa laboral activa permitirá acceder a los beneficios que este establece.

Artículo 67. Determinación del monto de la pensión

67.1 El monto de la pensión de jubilación se calcula en función de los factores siguientes:

a) El capital acumulado de la cuenta individual de capitalización del afiliado.

b) El producto del aporte del Estado y su rentabilidad.

67.2 En aquellos casos en los que el afiliado haya aportado cifras superiores al mínimo, el reglamento de la presente ley establecerá la forma de cálculo para obtener el monto de la pensión.

Artículo 68. Reintegro de los aportes

68.1 El afiliado que cumpla sesenta y cinco (65) años de edad o trescientas (300) aportaciones efectivas, así como el afiliado que sea declarado con incapacidad permanente parcial, dictaminada previamente por una comisión médica de ESSALUD o del Ministerio de Salud o la que corresponda, podrá solicitar el reintegro del monto acumulado en su cuenta individual más la rentabilidad que haya obtenido.

68.2 *En caso de fallecimiento, los herederos podrán solicitar el reintegro de lo aportado por el causante, incluyendo la rentabilidad.*

68.3 *En el reglamento se establecerán los requisitos y condiciones para la devolución.*

Artículo 69. Pensiones de sobrevivencia

69.1 *Son pensiones de sobrevivencia las siguientes:*

a) *De viudez.*

b) *De orfandad.*

69.2 *Se otorgará pensión de sobrevivencia:*

a) *Al fallecimiento de un afiliado con derecho a pensión de jubilación o que de haber quedado en situación de discapacidad hubiere tenido derecho a pensión de invalidez.*

b) *Al fallecimiento de un pensionista en situación de discapacidad o jubilación.*

69.3 *En el reglamento se establecen las condiciones y requisitos para obtener las prestaciones que se hace referencia en el presente capítulo.*

Artículo 70. Pensión de viudez

70.1 *Tiene derecho a pensión de viudez el cónyuge o conviviente del afiliado o pensionista fallecido. En el caso de las uniones de hecho debe acreditarse dicha unión, de acuerdo con el artículo 326 del Código Civil, aprobado mediante el Decreto Legislativo 295.*

70.2 *El monto máximo de la pensión de viudez es igual al cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión de jubilación que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante.*

70.3 *Caduca la pensión de viudez:*

a) *Por contraerse nuevo matrimonio civil o religioso.*

b) *Si se demuestra la existencia de otra unión de hecho.*

Artículo 71. Pensión de orfandad

71.1 *Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de dieciocho (18) años del afiliado o pensionista fallecido.*





71.2 Subsiste el derecho a pensión de orfandad:

a) Siempre que el beneficiario siga en forma ininterrumpida y satisfactoria estudios del nivel básico o superior de educación, hasta los veinticuatro (24) años de edad.

b) Para los hijos mayores de dieciocho (18) años en situación de discapacidad permanente total, dictaminada previamente por una comisión médica de ESSALUD o del Ministerio de Salud o la que corresponda.

71.3 La pensión será equivalente al veinte por ciento (20%) por cada beneficiario.

Artículo 72. Monto máximo de la pensión de sobrevivencia

72.1 Cuando la suma de los porcentajes máximos que corresponden al cónyuge sobreviviente y a cada uno de los herederos legales de conformidad con los artículos anteriores exceden al ciento por ciento (100%) de la pensión de jubilación que percibía o hubiere tenido derecho a percibir el causante, dichos porcentajes se reducirán proporcionalmente, de manera que la suma de todos los porcentajes así reducidos no exceda del ciento por ciento (100%) de la referida pensión. En tal caso, las pensiones de viudez y orfandad equivaldrán a los porcentajes que resulten.

72.2 La pérdida de los requisitos para continuar percibiendo la pensión de sobrevivencia no implica que dicho monto sea redistribuido entre los demás beneficiarios.

Artículo 73. Traslado a otro régimen previsional

Los afiliados del Sistema de Pensiones Sociales podrán trasladarse con los recursos acumulados de su cuenta individual, el aporte del Estado y rentabilidad de los mismos, al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), según su elección y viceversa, de acuerdo con las condiciones y requisitos que se establecerán por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 74. Fondo de Pensiones Sociales

74.1 Se crea el Fondo de Pensiones Sociales, de carácter intangible e inembargable, cuya administración podrá ser realizada por una AFP o por la ONP de acuerdo con lo señalado en la presente ley.

74.2 La Superintendencia, en el caso de que el afiliado elija que sus aportes sean administrados por la AFP, podrá determinar que los mismos se incluyan dentro de la licitación a que refiere el artículo 7-A del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF. Para tal fin, la Superintendencia emitirá las normas reglamentarias correspondientes.

Artículo 75. Recursos del fondo

75.1 Constituyen recursos del fondo administrado por la AFP:

a) El aporte del afiliado a que se refiere la presente ley.

b) El aporte del Estado, según corresponda.

c) La rentabilidad obtenida por la inversión de sus recursos.

d) Las donaciones que por cualquier concepto reciban.

75.2 Constituyen recursos del fondo administrado por la ONP:

a) El aporte del afiliado a que se refiere la presente ley.

b) El aporte del Estado, según corresponda.

c) El aporte del Estado.

d) La rentabilidad obtenida por la inversión de los recursos.

e) Las donaciones que por cualquier concepto reciban.

Artículo 76. Criterios de la inversión

76.1 El Fondo de Pensiones Sociales, en el caso de que sus recursos sean administrados por la AFP, se invertirá teniendo en cuenta, en forma concurrente, las siguientes condiciones:

a) La mayor rentabilidad posible.

b) La liquidez.

c) La garantía del equilibrio financiero del Sistema de Pensiones Sociales.

76.2 *La rentabilidad e inversiones del Fondo de Pensiones Sociales respecto a la administración realizada por la AFP se sujetarán a la normatividad vigente del Sistema Privado de Pensiones. Cuando la administración se realiza por la ONP, su rentabilidad e inversiones respecto al aporte del afiliado se ejecutarán a través del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) y de acuerdo con la política de inversiones aprobada por su directorio.*

CAPÍTULO XIII

MARCO INSTITUCIONAL PARA LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

Artículo 77. Órgano rector

El Ministerio de la Producción es el órgano rector en materia de micro y pequeños emprendimientos. Define las políticas nacionales de promoción, formalización y competitividad; coordina con las entidades del sector público y privado la articulación y complementariedad de las políticas sectoriales.

Artículo 78. Consejo Nacional para el Desarrollo del Micro y Pequeño Emprendimiento

78.1 *El Consejo Nacional para el Desarrollo del Micro y Pequeño Emprendimiento (Codemype), adscrito al Ministerio de la Producción, es el órgano que agrupa a los actores públicos, privados y representantes de las organizaciones de micro y pequeños emprendimientos. Lo preside un representante del presidente de la República, preferentemente titular o conductor de un microemprendimiento, y está integrado por:*

a) Un representante del Ministerio de la Producción.

b) Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

c) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

d) Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y un representante de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

e) Un representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.



f) *Un representante del Consejo Nacional de Competitividad.*

g) *Un representante de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).*

h) *Un representante de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).*



i) *Un representante de los organismos privados de promoción de los micro y pequeños emprendimientos.*

j) *Un representante de los consumidores.*

k) *Un representante de las universidades públicas y privadas.*

l) *Dos representantes de los gobiernos regionales.*

m) *Dos representantes de los gobiernos locales.*

n) *Siete representantes de las organizaciones de los Mype. De estos, corresponde dos representantes a las organizaciones de pequeños emprendimientos y cinco representantes a las organizaciones de microemprendimientos.*

78.2 El Codemype tiene una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio de la Producción.

78.3 Representantes de la Cooperación Técnica Internacional podrán participar como miembros consultivos del Codemype.

78.4 El Codemype adecúa su reglamento de organización y funciones, a los alcances de la presente ley, en un plazo máximo de treinta (30) días.

Artículo 79. Funciones del Codemype

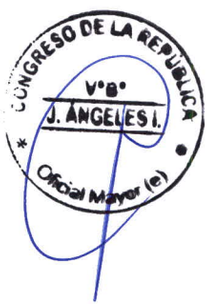
Las funciones del Codemype son:

a) *Aprobar el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de los Micro y Pequeños Emprendimientos que incorpora las prioridades regionales por sectores señalando los objetivos y metas correspondientes.*

b) *Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas y acciones sectoriales de apoyo a los micro y pequeños emprendimientos, a nivel nacional, regional y local.*



c) *Supervisar el cumplimiento de las políticas, los planes, los programas y desarrollar las coordinaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, tanto a nivel de gobierno nacional como de carácter regional y local.*



d) *Promover la activa cooperación entre las instituciones del sector público y privado en la ejecución de programas.*

e) *Promover la asociatividad y organización de los Mype, como consorcios, conglomerados o asociaciones.*

f) *Promover el acceso de los Mype a los mercados financieros, de desarrollo empresarial y de productos.*

g) *Articular el acceso de los Mype a los mercados internacionales a través de la promoción por parte de MINCETUR y PROMPERÚ.*

h) *Fomentar la articulación de los Mype con las medianas y grandes empresas promoviendo la organización de los Mype proveedores para propiciar el fortalecimiento y desarrollo de su estructura económico-productiva.*

i) *Elaborar y actualizar en forma permanente la base de datos e información estadística sobre el número de micro y pequeños emprendimientos no formalizados en el país.*

CAPÍTULO XIV

CONSEJOS REGIONALES Y CONSEJOS LOCALES

Artículo 80. Creación

Los gobiernos regionales y gobiernos locales crean, en forma obligatoria en su circunscripción y bajo responsabilidad, consejos regionales y consejos locales del micro y pequeño emprendimiento, con el objeto de promover su formalización, desarrollo y competitividad, así como su articulación con los planes y programas nacionales.

Artículo 81. Conformación

Su conformación debe responder a las particularidades de cada circunscripción garantizando la participación del sector público, así como de los micro y



pequeños emprendedores. Los preside un representante del gobierno regional o local, respectivamente.

Artículo 82. Convocatoria y coordinación

La convocatoria y coordinación de los consejos regionales y locales está a cargo de cada gobierno regional o local en su respectiva circunscripción.



Artículo 83. Funciones

Los consejos regionales y consejos locales promueven el acercamiento entre las diferentes organizaciones de los Mype, entidades privadas y autoridades regionales o locales; dentro de la estrategia y en el marco de las políticas nacionales y regionales, teniendo como funciones:

a) *Aprobar el Plan Regional o Local de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de los Mype, el cual debe incorporar las prioridades sectoriales de cada circunscripción, señalando los objetivos y metas que serán alcanzados al Codemype para su evaluación y consolidación.*
b) *Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas y acciones sectoriales de apoyo a los Mype, a nivel regional y local.*
c) *Supervisar las políticas, planes y programas de promoción de los Mype, en su ámbito.*
d) *Otras funciones que se establezcan en el reglamento de organización y funciones de las secretarías regionales o locales.*

Artículo 84. Rol de los gobiernos regionales y gobiernos locales

84.1 *Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven la inversión privada en la construcción y habilitación de infraestructura productiva, comercial y de servicios, con base en el ordenamiento territorial, y en los planes de desarrollo local y regional; así como la organización de ferias y otras actividades que logren la dinamización de los mercados en beneficio de los Mype. La presente disposición se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia.*

84.2 *El reglamento establece las normas complementarias para la aplicación de la presente disposición.*

CAPÍTULO XV

FISCALIZACIÓN A LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

Artículo 85. Fiscalización preventiva y educativa a los micro y pequeños emprendimientos

85.1 *La fiscalización realizada por las entidades de la administración estatal a los Mype es preventiva, de acompañamiento y educativa.*

85.2 *Las entidades de la administración estatal con facultades de fiscalización establecen programas de prevención, acompañamiento y educativos para reducir la comisión de infracciones y la imposición de sanciones punitivas.*

Artículo 86. Medida educativa en materia tributaria y laboral

86.1 *La SUNAT, en ejercicio de sus funciones, aplica medidas educativas ante infracciones tributarias que cometan por primera vez los Mype, sin considerar el régimen tributario en que se encuentren, para reducir el incumplimiento tributario mediante aprendizajes específicos que permitan generar cultura tributaria.*

86.2 *La SUNAFIL, en ejercicio de sus funciones, aplica medidas educativas ante infracciones laborales leves que cometen por primera vez los Mype para reducir el incumplimiento laboral mediante aprendizajes específicos que permitan generar la cultura preventiva.*

86.3 *Las medidas educativas se aplican conforme a las disposiciones establecidas en la presente ley, el Código Tributario, la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y demás normas aplicables.*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Fondo para negociación de facturas

Se autoriza a COFIDE a administrar un fondo destinado a financiar el descuento de facturas provenientes de las ventas de los Mype a que se refiere la presente ley. Las características y la operatividad del fondo serán aprobadas por resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEGUNDA. Declaración de interés nacional

a) Se declara de interés nacional el diseño e implantación de una política pública para la formalización, desarrollo y competitividad de los micro y pequeños emprendimientos, con participación de los representantes de las organizaciones que agrupan a los micro y pequeños emprendedores.

b) Se declara de interés nacional el otorgamiento de créditos con tasa de interés preferencial a los micro y pequeños emprendimientos formalizados e inscritos conforme a las disposiciones de la presente ley. El Banco de la Nación puede suscribir convenios con entidades especializadas y asociaciones privadas no financieras de apoyo a dichos emprendimientos, a efectos de que el primero le brinde servicios de ventanilla.

c) Se declara de interés nacional la asignación de bienes inmuebles de propiedad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, para el desarrollo de zonas industriales o parques industriales con la finalidad de fomentar la creación, formalización, desarrollo y competitividad, preferentemente, de los microemprendimientos iniciados por los jóvenes del país.

TERCERA. Creación de registros

El Ministerio de la Producción, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales y en el plazo de sesenta (60) días contados desde la vigencia de la presente ley, implementa y mantiene actualizados los siguientes registros:

a) Registro Nacional MYPE, en el que se inscriben los micro y pequeños emprendimientos del país.

b) Registro Nacional de Emolienteros del Perú, en el que se inscriben los microemprendimientos dedicados a la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras infusiones, y de quinua, maca y kiwicha, considerados en la Ley 30198.

Para la implementación de dichos registros se contará con la colaboración de los gobiernos locales. La información será accesible a las entidades de la administración estatal, de los beneficiarios y servirá para expedir las



certificaciones establecidas en la presente ley o las que corresponda, siguiendo el procedimiento que determine el reglamento.

c) *Registro de políticas, programas y buenas prácticas internacionales sobre micro y pequeños emprendimientos.*



CUARTA. Exoneración de costos para los microemprendimientos

Los Mype están exonerados del setenta por ciento (70%) de los derechos de pago previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), por los trámites y procedimientos que efectúan ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Los gobiernos descentralizados y demás entidades de la administración estatal podrán reducir o exonerar del pago de tasas o derechos por otorgamiento de licencias, autorizaciones o permisos a los micro o pequeños emprendimientos, considerando la naturaleza de cada trámite.

QUINTA. Personas en situación de discapacidad

En las instituciones públicas donde se otorgue en concesión servicios de fotocopiado, mensajería u otros de carácter auxiliar a las labores administrativas de oficina, las micro emprendimientos constituidos y conformados por personas en situación de discapacidad o personas adultas de la tercera edad, en condiciones de similar precio, calidad y capacidad de suministro, serán consideradas prioritariamente para la prestación de tales servicios.

SEXTA. Sanciones

En caso de simulación o fraude, a efectos de acceder a los beneficios de la presente ley, se aplicará las sanciones previstas en la legislación vigente.

SÉPTIMA. Referencia a los Mype

En las normas del ordenamiento jurídico en que se haga referencia a la micro y pequeña empresa (MYPE), se debe entender que se hace referencia a los micro y pequeños emprendimientos (Mype).

OCTAVA. Administración del Remype

El Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) creado mediante el Decreto Supremo 008-2008-TR, se denomina Registro del Micro y Pequeño Emprendimiento (Remype) y es administrado por la SUNAT.

NOVENA. Financiamiento para la implementación de la ley

Las disposiciones de la presente ley se financian con cargo a los recursos de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

DÉCIMA. Vigencia

La presente ley entra en vigencia desde el día siguiente de la fecha de publicación de su reglamento. El plazo máximo para reglamentar la presente ley es de sesenta (60) días contados a partir de su vigencia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Declaratoria de emergencia de los microemprendimientos

Se declara en emergencia a los microemprendimientos por un plazo de tres (3) años contados desde la vigencia de la presente ley. En este plazo rigen las siguientes disposiciones:

a) *El proceso de formalización que comprende la inscripción registral y demás trámites ante entidades del Poder Ejecutivo para el funcionamiento de los microemprendimientos señalados en la presente ley son gratuitos.*

b) *Se concede amnistía para los microemprendimientos o microempresas a fin de regularizar el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y de seguridad social vencidas hasta la entrada en vigencia de la presente ley. La amnistía laboral y de seguridad social, referida esta última a las aportaciones a ESSALUD y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solo concede a los empleadores el beneficio de no pagar multas, intereses u otras sanciones administrativas que se generen o hubiesen generado por el incumplimiento de dichas obligaciones ante las autoridades administrativas, tales como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ESSALUD y ONP. El acogimiento al presente beneficio tendrá un plazo de noventa (90) días contados desde la vigencia de la presente ley.*

c) *En las compras estatales previstas por la presente ley, no será exigible a los Mype historial o antecedentes contractuales con el Estado y se priorizará la oferta de los Mype regionales y locales del lugar donde se realicen las compras o se ejecuten las obras públicas. El reglamento establece las normas complementarias para la aplicación de la presente disposición.*

d) *El Poder Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones y competencias, debe establecer un régimen tributario especial con impuesto único o monotributo y una declaración anual simplificada automatizada.*

e) *Los microemprendimientos quedan exonerados de llevar contabilidad o libros contables debiendo la SUNAT implementar un sistema que viabilice dicha exoneración y facilite la declaración anual simplificada de tributos.*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación de artículos del Decreto Legislativo 816, que aprueba el Código Tributario

Se modifican los artículos 165 y 180 del Decreto Legislativo 816, que aprueba el Código Tributario, con el siguiente texto:

*"**Artículo 165. DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN, TIPOS DE SANCIONES Y AGENTES***

La sanción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. También procede sancionar mediante medidas educativas en los supuestos y en las condiciones establecidas en el artículo 180".

*"**Artículo 180. TIPOS DE SANCIONES***

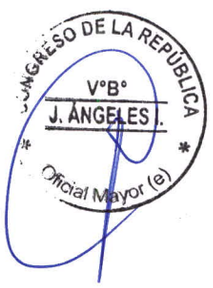
180.1 La administración tributaria aplicará, por la comisión de infracciones, las sanciones consistentes en multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de

establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos de acuerdo con las tablas que, como anexo, forman parte del presente código.

180.2 En la fiscalización por incumplimiento de obligaciones tributarias de los micro y pequeños emprendimientos definidos en la presente ley, e independientemente del régimen tributario en que se encuentren, ante la primera infracción detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) o incurrida no detectada y comunicada por el infractor, corresponde aplicar con antelación a cualquier otra sanción, una medida educativa por cada tipo de infracción formal o sustancial de las previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 172 y precisadas en los artículos 173, 174, 175 y 176. Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT establece las medidas educativas, entendidas como acciones que implican una capacitación directa y eficiente, en el marco de la formación y creación de cultura tributaria, con la finalidad de reducir el incumplimiento tributario, coadyuvar al desarrollo de competencias específicas, mejorar la eficiencia en la gestión del microemprendimiento o microempresa y contribuir al aprendizaje específico respecto del tipo de infracción.

Las medidas educativas consisten en la asistencia a una capacitación en el local de la SUNAT que se designe, la impartición de capacitación por SUNAT en el local del micro o pequeño emprendimiento, la entrega de material instructivo que explique el tipo de infracción y todo otro mecanismo (presencial, audiovisual, electrónico, entre otros). No procede aplicar medidas educativas a las microempresas que tengan como titular o socios a personas que





hubieran sido condenadas por delitos tributarios, ni a las entidades públicas.

Las medidas educativas son aplicadas por SUNAT antes de las facultades de gradualidad y discrecionalidad establecidas en el artículo 166. La SUNAT notifica la medida educativa dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de la infracción, caso contrario no procede la aplicación de la sanción. El incumplimiento de la medida educativa da lugar a la sanción prevista para la infracción correspondiente.

La SUNAT, en uso de sus facultades, emite dentro del plazo de 120 días calendario las normas para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo e incorpora en su página web tutoriales por cada tipo de infracción formal o sustancial establecida en el artículo 172 para el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias".

SEGUNDA. Modificación del artículo 39 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

Se modifica el artículo 39 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, con el siguiente texto:

*"**Artículo 39. Cuantía y aplicación de sanciones***

39.1 Las infracciones detectadas son sancionadas con una multa máxima de:

a) Doscientas unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones muy graves.

b) Cien unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones graves.

c) Cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones leves.

La multa máxima por el total de infracciones detectadas no podrá superar las trescientas unidades impositivas tributarias (UIT) vigentes en el año en que se constató la falta.





La aplicación de las mencionadas sanciones y la graduación de las mismas es efectuada teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

El incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo imputable al empleador que produce la muerte como resultado de un accidente de trabajo; así como, la obstrucción a la labor de la inspección de trabajo para su investigación, se sancionan con multa administrativa y el cierre temporal del área de la unidad económica o de la unidad económica a cargo del sujeto inspeccionado.

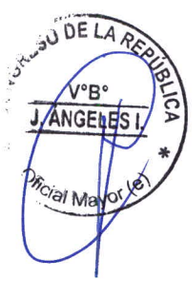
Sin perjuicio de la sanción administrativa, los casos de incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo imputables al empleador, que resulten en un accidente mortal, determinados en una resolución administrativa, son puestos en conocimiento del Ministerio Público por la Autoridad Inspectiva de Trabajo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

La sanción que se imponga por las infracciones que se detecten a las empresas calificadas como pequeños emprendimientos conforme a ley se reduce en 50% y a las calificadas como microemprendimientos se reduce en 70%.

39.2 En la fiscalización por incumplimiento de obligaciones laborales por los micro o pequeños emprendimientos definidos en la presente ley, siempre que se trate de infracciones previstas en el literal a) del artículo 31, ante la primera infracción detectada por la autoridad o incurrida no detectada y comunicada por el infractor, corresponde aplicar con antelación a cualquier otra sanción una medida educativa por cada tipo de infracción formal.

Mediante resolución de superintendencia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) establece las medidas





educativas, entendidas como acciones que implican una capacitación directa y eficiente, en el marco de la formación preventiva para reducir el incumplimiento, coadyuvar al desarrollo de competencias específicas, mejorar la eficiencia en la gestión del micro o pequeño emprendimiento, así como contribuir al aprendizaje específico respecto a dichas infracciones.

Las medidas educativas consisten en la asistencia a una capacitación en el local de la SUNAFIL que se designe, la impartición de capacitación por la SUNAFIL en el local del micro o pequeño emprendimiento, la entrega de material instructivo que explique el tipo de infracción y todo otro mecanismo (presencial, audiovisual, electrónico, entre otros). No procede aplicar medidas educativas a los micro o pequeños emprendimientos que tengan como titular o socios a personas que hubieran sido condenadas por delitos contra los derechos de los trabajadores, ni a las entidades públicas.

Las medidas educativas son aplicadas por SUNAFIL antes de las facultades de gradualidad y discrecionalidad. La SUNAFIL notifica la medida educativa en un plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de la infracción, de lo contrario no procede la aplicación de la sanción. El incumplimiento de la medida educativa da lugar a la sanción prevista en el presente código para la infracción correspondiente.

La SUNAFIL, en uso de sus facultades, emite en un plazo máximo de 120 días calendario las normas para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo e incorpora en su página web tutoriales por cada tipo de infracción formal o sustancial establecida en el artículo 131 para el cumplimiento adecuado de las obligaciones laborales".

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación parcial o total de leyes

a) Se derogan:

— *Los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, la sétima disposición complementaria final, la segunda disposición complementaria transitoria y la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.*

— *El artículo 3 de la Ley 29566, Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.*

— *El artículo 2 de la Ley 29034, Ley que establece la homologación de los contratos de obra con los contratos de bienes y servicios que celebren las MYPE con el Estado para poder otorgar la retención del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento.*

— *La vigésima segunda disposición complementaria final de la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.*

— *La sexta disposición complementaria transitoria de la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.*

— *La novena disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.*

— *La Ley 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa; el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.*

— *La Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.*

— *El Decreto Legislativo 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al Empleo Decente.*

b) Se deja sin efecto:

— *El artículo 6 del Decreto Supremo 004-2007-SA, que establece el listado priorizado de intervenciones sanitarias de aplicación obligatoria para todos los establecimientos que reciban financiamiento del SIS.*

— *El Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.*

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de julio de dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA